

PRESIDENCIA DEL SEÑOR ANGEL SASTRE

Diputados presentes.—Acuña, Aldao, Alvarez (A.), Alvarez (J. M.), Amenedo, Argañarás, Argerich, Astrada, Astudillo, del Barco, Barraquero, Barraza, Bejarano, Campos, Carbo, Carlés, Carrereño, Castro, Comaleras, Coutte, Cordero, Coronado, Correa, Crouzeilles, Dantas, Demaria, Dominguez, Elordi, Figueroa, Fleming, Fonrouge, Galiano, García Vieyra, Garzón, Gigena, González Bonorino, Gouchon, Grandoli, Guevara, Gutiérrez, Hernández, Irigoyen, Iriondo, Iturbe, Lacasa, Laferrère, Lagos, Latorre, Ledesma, Leguizamón, Lezica, Lucero, Luque, Machado, Martínez (J. A.), Martínez (J. E.), Martínez Rufino, Monsalve, Moyano, Mugica, Naón, O'Farrell, Oliver, Olmos, Padilla, Palacios, Parera, Parera Denis, Pera, Pinedo (M. A.), Ponce, de la Riestra, Robirosa, Rodas, Rodas, Romero, Seguí, Silva, Uriburu (F.), Uriburu (P.), Urquiza, Varela, Varela Ortiz, Vedia, Villanueva, Vocos Giménez, Yofre, Zavalla.—**Con aviso:** Cernadas, Delcasse, Fonseca, García, Lamas, Ovejero, Roldán, Victorica.—**Sin aviso:** Balestra, Berrondo, Bustamante, Cantón, del Carril, Ferrari, Luna, Luro, Martínez (J.), Martínez (M.), Méndez, Mohando, Paz, Peiuffo, Pinedo (F.), Rivas, de la Serna, Sivilat Fernández, Vieyra Latcare.

SUMARIO

- 1.—Moción para tratar con preferencia tres despachos de la comisión de obras públicas relativos á la **construcción de edificios**: 1º, para escuela normal de maestras en Concepción del Uruguay; 2º, para hospital de clínicas de Córdoba; 3º, para cuarteles seccionales de bomberos en la Capital.
- 2.—Moción para tratar con preferencia un despacho de la comisión de negocios constitucionales, sobre reforma del artículo 113 de la ley de elecciones.
- 3.—Comunicaciones del senado.
- 4.—Peticiones particulares.
- 5.—Aprobación de un despacho de la comisión de obras públicas referente á la construcción de un edificio para **escuela normal de maestras** en Concepción del Uruguay.
- 6.—Aprobación de un despacho de la comisión de obras públicas acordando fondos para la terminación del edificio del **hospital de clínicas de Córdoba**.
- 7.—Aprobación de un despacho de la comisión de obras públicas en el proyecto de ley modificado por el senado, referente á la construcción de **edificios para cuarteles seccionales de bomberos** en la Capital.

- 8.—Discusión del despacho de la comisión de negocios constitucionales en el proyecto de ley sobre modificación del artículo 113 de la ley de elecciones.
- 9.—Se señala la sesión para empezar la consideración del despacho de la comisión de obras públicas relativo á **fusión de los ferrocarriles Buenos Aires y Rosario y Central Argentino**.

—En Buenos Aires, á 19 de julio de 1905, el señor presidente declara reabierta la sesión á las 3 y 40 p.m.

1

MOCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE VARIOS EDIFICOS PÚBLICOS

Sr. del Barco—Pido la palabra.

Voy á hacer indicación para que se traten, inmediatamente después de dar cuenta de los asuntos entrados, tres despachos que figuran en la orden del día número 37, con los números 1, 4 y 5.

El primero es una modificación á la ley número 4270, que manda construir

Sr. Secretario Ovando — El del honorable senado.

Sr. Correa — ¿Es una modificación al que sancionó esta cámara?

Sr. del Barco — Sí, señor.

Sr. Correa — Perfectamente.

Sr. Presidente — Se votará el artículo 1.º del proyecto en discusión.

— Se vota, y resulta afirmativa.

— Se aprueba igualmente el artículo 2.º

— El 3.º es de forma.

8

MODIFICACIÓN

DEL ARTÍCULO 113 DE LA LEY DE ELECCIONES

A la honorable Cámara de diputados.

La comisión de negocios constitucionales ha estudiado el proyecto de ley presentado por varios señores diputados, modificando el artículo 113 de la ley 4161; y por las razones que expone el miembro informante, os aconseja la sanción del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de diputados, etc.

Artículo 1.º Serán penados con arresto de seis meses á un año:

- 1.º Los miembros de la justicia federal y local de la capital y de las provincias comprendidos los jueces de paz, asesores, fiscales, defensores y secretarios los empleados y funcionarios de policía de la capital y de las provincias y los empleados del registro civil dependientes del gobierno de la nación y de las provincias de cualquier jerarquía que sean, que directa ó indirectamente tomen participación política en favor de partido ó candidato determinado durante las luchas ó que en cualquier tiempo hagan acto de adhesión ostensible ó de oposición manifiesta con relación á los partidos políticos existentes ó en formación, salvo el derecho de emitir su voto;
- 2.º Los funcionarios públicos nacionales ó provinciales que tengan bajo su dependencia, como jefes de repartición u oficina uno ó más empleados y los induzcan á adherir á candidatos ó partidos determinados.

Art. 2.º Todas las faltas enumeradas y las penas establecidas en el artículo anterior y en la ley electoral se entenderán sin perjuicio de lo que dispone el código penal y los

que correspondan por delitos comunes conexos ó correlacionados con los hechos previstos y penados en la ley electoral y en la presente, llevarán consigo como consecuencia inmediata:

- 1.º La privación temporaria del derecho de sufragio y pérdida del empleo cuando el culpable es funcionario público; si el funcionario fuera del poder judicial, de la policía ó del registro civil quedará además inhabilitado para el desempeño de todo puesto público por cinco años.
- 2.º En caso de reincidencia, la pena será la incapacidad absoluta por tiempo indeterminado para todos los funcionarios públicos; y la incapacidad absoluta, pero temporaria, para los particulares.

Art. 3.º Todos los juicios motivados por infracciones á la ley electoral y á la presente serán sustanciados ante los juzgados federales, con intervención del agente fiscal.

Quando recaigan contra funcionarios que por la constitución nacional ó por las constituciones provinciales gocen de inmunidades para estar en juicio, éste no podrá llevarse adelante, sin que previamente se hayan levantado las inmunidades por quien correspondía.

Art. 4.º Salvo las reglas prescriptas para algunos juicios especiales en la ley electoral, se observarán las siguientes:

- 1º Presentada la acusación, el tribunal citará á juicio verbal y actuado al acusador y al acusado, dentro de los tres días;
- 2º Si resultare necesaria la prueba se podrá fijar un término, como base de tres días, durante los cuales deberán solicitarse todas las diligencias conducentes á producirla;
- 3º Los jueces, á petición de parte, podrán solicitar de quien corresponda la remisión del documento que se denuncie como falsificado ó adulterado á los efectos del juicio, y vencidos los tres días fijados en el inciso anterior, y recibido el documento ó documentos pedidos, se citarán inmediatamente á nueva audiencia, en la cual se examinarán testigos públicamente, se oirá la acusación y la defensa, y levantándose acta de todo, se citará en el mismo acto á las partes para sentencia, la que se dictará dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes del comparendo, previa vista del agente fiscal;
- 4º El retardo de justicia en estos casos, será penado con multa de doscientos á quinientos pesos;
- 5º El procedimiento en las causas electorales continuará aunque el querellante desista, y la sentencia que se diese producirá ejecutoria aunque se dictare en rebeldía del acusado.

Julio 19 de 1905

CÁMARA DE DIPUTADOS

12.ª sesión ordinaria

Art. 5.º Sin perjuicio de las reglas que sobre las apelaciones se especifican en la ley electoral y en las de procedimientos ante los tribunales nacionales, habrá apelación de toda resolución, fallo ó sentencia en materia electoral, siempre que se imponga una multa de más de doscientos pesos y arresto de más de dos meses, en la forma siguiente:

- 1º Para ante los jueces nacionales de sección, de toda resolución de las juntas electorales de distrito;
- 2º Para ante las cámaras federales de apelación, de los fallos de los jueces de sección.

Art. 6.º Deróganse los artículos 110, 111, 113, 116 y 117 de la ley electoral núm. 4161.

Art. 7.º Comuníquese al poder ejecutivo. Sala de la comisión, julio 18 de 1905.

*M. de Vedia.—José Fonrouge.—
José Yofre.—Amador Lucero.*

En disidencia sobre la segunda parte del artículo 3º.

Adolfo Mugica.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de diputados, etc.

Artículo 1.º Agrégase al artículo 113 de la ley núm. 4161, sobre elecciones nacionales, la cláusula siguiente: "No se incluye en esta disposición las acusaciones contra los funcionarios públicos de la nación ó de las provincias á quienes corresponda el juicio político, mientras éste no quede concluido ante el tribunal que corresponda."

Art. 2.º Comuníquese, etc.

Buenos Aires, 15 de julio de 1905.

*A. Carbó.—C. A. Aldao.—C. Pon-
ce.—Julio A. Roca (hijo).—Er-
nesto E. Padilla. — Adolfo
Contte.—G. del Barco.—Gon-
zalo Figueroa.*

Sr. Presidente—Está en discusión en general.

Sr. Vedia—Pido la palabra.

De vuelta en la comisión de negocios constitucionales todos sus miembros, los triunfadores de la lista y los vencidos de la circunscripción, debíamos encontrarnos de nuevo, con motivo del proyecto del señor diputado Carbó y otros distinguidos colegas, en presencia de la ley electoral.

Cualesquiera que fuesen las impresiones que hubiéramos llevado del último

debate, de la última sanción de la cámara, era natural que todos nos sintiésemos vinculados por un propósito común: el de estudiar desapasionadamente el proyecto, aprovechando la oportunidad que se nos presentaba para proponer á la honorable cámara la reforma de otros puntos, que podían considerarse conexos con el que motivaba el agregado al artículo 113 de que en principio se trataba.

No debía temer, señor presidente, la comisión, afrontar el debate de estas modificaciones, y no debía temerlo porque el congreso de la nación es—y esto no debe olvidarse—un cuerpo gobernante, militante, que vive y se desenvuelve con su tiempo, que no puede en manera alguna encerrarse en abstracciones propias de otros poderes, y que descuidaría y olvidaría su misión más inmediata y más palpitante, por decirlo así, si descuidase y se apartase de los hechos de la vida nacional diaria, que es al fin su propia vida.

En este orden de ideas, señor presidente, y dadas las conexiones de la reforma con el resto de los artículos que el despacho comprende, la comisión debía recordar los debates á que dió lugar no hace mucho tiempo el artículo 110 de la ley electoral, respecto del cual no necesitaré insistir ante la honorable cámara, dado que el artículo 110, si no en sus propios términos, por las interpretaciones á que dió lugar, tenía una amplitud inaceptable, pues constituía en delitos y condenaba actos que podrían considerarse, con el criterio de la vida cívica, más bien plausibles y dignos de ser estimulados que de ser entorpecidos ó corregidos.

La extensión de ese artículo, en cuanto se refiere á funcionarios de la administración á quienes se llegaba á impedir que pudiesen en cierto caso recomendar á sus conciudadanos candidaturas presidenciales, por ejemplo, era, digo, inadmisibles, en cuanto privaba precisamente de ese precioso derecho á los hombres que por su posición y por su acción debían considerarse más aptos para intervenir en asambleas políticas de ese carácter y para dirigirse á sus conciudadanos en semejantes términos. El artículo reformado, señor presidente, limita las prohibiciones del artículo 110 á los funcionarios que más directamente interesa mantener alejados del ejercicio de estos derechos populares. Me refiero á los miembros del poder

judicial, á los empleados del registro cívico y al personal de la policía. Naturalmente, debían ser comprendidos los jefes de todas las reparticiones que tuviesen uno ó más subordinados á sus órdenes, porque éste podía ser el caso expreso de la coacción directa que es necesario evitar; y así, en la segunda parte del artículo 1.º del despacho de la comisión, se alude á los funcionarios en tales condiciones.

El artículo 2.º del despacho agrava en cierto modo las penas atribuidas á los funcionarios del artículo 110, y era natural que tendiese á establecer esta agravación en cuanto especializaba, por decirlo así, los delitos, en funcionarios á los cuales interesa mantener alejados, como acabo de expresarlo, de una participación directa en asuntos políticos.

El artículo 4.º—y deliberadamente paso sobre los artículos 2.º y 3.º—no es sino el artículo 116 de la ley actual, habiéndose modificado simplemente el inciso 3.º, á fin de dar intervención al ministerio fiscal, que no la tenía por la ley anterior, y extendiéndose el plazo para la sentencia, de veinticuatro á cuarenta y ocho horas, con el fin también, de hacer posible, dentro de un término prudencial, esa intervención fiscal.

El artículo 3º, señor presidente, es el que establece el fuero federal para los delitos electorales y el que contiene el agregado propuesto por el proyecto de varios señores diputados, que fundó el señor diputado Carbó, al artículo 113 de la ley vigente.

En cuanto al fuero, señor presidente, estoy seguro que con las mismas facilidades con que se ha restablecido en la comisión, lo restablecerá también la honorable cámara. Es éste, sin duda, el que deriva directamente del artículo 100 de la constitución, el que han determinado todas las leyes del congreso, desde la ley del 63, que estableció la jurisdicción de los tribunales federales y que en su artículo 3º declaraba de competencia de los jueces de sección todo delito que significase es torbo ó falseamiento de las elecciones nacionales.

El proyecto del poder ejecutivo atribuía al fuero federal el conocimiento de estos delitos electorales; la honorable cámara lo sancionó así; en el senado se estableció la jurisdicción de la justicia ordinaria; y devuelto á la honorable cámara el proyecto, ésta no le prestó mayor consideración.

Se trata, señor presidente, de una doctrina que podría llamar incontrovertible. Toda ella, para no hacer repeticiones, está contenida en un luminoso voto en disidencia, del doctor Astigueta, enriquecido con las opiniones de nuestros primeros tratadistas sobre la materia. En ese voto está citada la opinión de Alberdi, la opinión de Irigoyen, de Sarmiento, de González, de Alcorta y la jurisprudencia de la corte, establecida en diversas decisiones. Tengo en mi poder el voto del doctor Astigueta, que me ha facilitado la tarea para encontrar todas estas citas tan oportunas y autorizadas; pero creo que no será necesario apelar á él, ni aun en el caso de la discusión en particular.

Llegamos, señor presidente, al punto en que nuestro distinguido colega el señor diputado Mujica establece su disidencia en la firma del despacho, por las razones que la honorable cámara ha de oírle más tarde.

El proyecto de los señores diputados que ha motivado el despacho de la comisión viene destinado á contrariar una tendencia que marcó con toda elocuencia el señor diputado Carbó al fundar el proyecto, y que es una tendencia de la legislación y en cierto modo podría decirse de la justicia.

El proyecto se relacionaba con un caso inmediato; pero á ese caso se agrega el del gobernador de Catamarca, señor Ferrari, acusado por el entonces diputado al congreso, hoy ministro del interior, doctor Castillo; el caso del ministro Gigena, de la provincia de Tucumán, el del ministro de hacienda de la provincia de Buenos Aires, el del juez Siburu, de la provincia de Santa Fe, y finalmente...

Sr. Vocos Giménez—¿Me permite el señor diputado?

Es para recordarle el caso del señor gobernador de Santa Fe y el del camarista del Rosario doctor Melo.

Sr. Vedia—Muchas gracias.

Como se ve, señor presidente, los casos son más numerosos que los que yo apuntaba, y contribuyen á despertar el interés de la cámara en el sentido de su consideración y de la sanción que aconseja el despacho de la comisión.

Se ha considerado, señor presidente, que esta reforma era innecesaria; así lo ha dicho un órgano de opinión al que estoy vinculado y al cual nos hemos referido en conversaciones que acabo de tener en antecámaras con algunos colegas;

y así lo dijo con toda claridad el señor diputado Carbó en cuanto estableció que parecía extraño que todavía necesitaríamos recordar preceptos constitucionales que deberíamos considerar claros, expresos y elementales.

Señor presidente: es frecuente en las leyes, ya sean de procedimiento, ya sean orgánicas, citar, aplicar, como complemento, como aclaración, disposiciones constitucionales. En muchas leyes se sigue ese sistema. Me hacía notar hace un momento el señor diputado Aldao, que firma el proyecto, que eso ocurre con la ley del 63, por ejemplo.

Se ha observado también que el código de procedimientos en lo criminal contiene, en el artículo 25, inciso 1.º, una disposición muy análoga á ésta, incorporada al artículo tercero del proyecto.

Efectivamente, el inciso 1.º del artículo 25 del código de procedimientos en lo criminal, que puedo citar con relación á procedimientos judiciales por que en alguna parte ha sido aplicado en estos días, á procesos análogos, establece que «la jurisdicción nacional originaria de los tribunales de la capital y de los territorios nacionales se extiende: 1.º al conocimiento de todos los delitos análogos cometidos en su respectiva jurisdicción por ciudadanos ó extranjeros, salvo, respecto de los tribunales de la capital, los casos especialmente exceptuados por el derecho público interno ó por los principios del derecho internacional.»

Es, como se ve, esta disposición final del inciso 1.º del artículo que acabo de leer, muy semejante, en su carácter, á la que se ha considerado necesario, según los hechos y las manifestaciones producidas, incorporar á la ley electoral.

La constitución nacional ha incorporado á su organismo á las constituciones de las provincias que en cierto modo forman parte de ella. Puede hacerse fácilmente esta afirmación con sólo citar los artículos 5º, 104 y 105 de la constitución nacional.

Las constituciones de las provincias, que alguien ha llamado codicilos de la constitución nacional, establecen el juicio político, es decir, han creado este fuero especial del juicio político para los gobernadores de las provincias y demás funcionarios que ellas establecen. ¿Con qué fin? Con el fin de hacer efectiva la responsabilidad política de los funcionarios, dejando intacta la

jurisdicción ordinaria para los delitos comunes.

Los gobernadores de las provincias son parte integrante también de la constitución nacional. Los gobernadores de las provincias integran, complementan el organismo de la constitución. Y para no citar las diversas disposiciones con que podría sustentar esta afirmación, me bastará recordar la más clara y mejor conocida de todas ellas: el artículo 110 que convierte á los gobernadores de provincia en agentes naturales del poder ejecutivo de la nación.

En estas condiciones, habiendo establecido este fuero especial en defensa de los gobernadores y otros funcionarios, este procedimiento del juicio político, ¿está ó no está amparado por la misma constitución de la nación, que en diversos artículos establece un procedimiento análogo y que ampara á esas constituciones en las condiciones de su artículo 5º? No es una de las bases esenciales del régimen republicano la responsabilidad de los magistrados, y no ha debido exigir y no ha exigido, la constitución, que las constituciones de las provincias sean dictadas con arreglo á los derechos y garantías de la constitución nacional, estableciendo el régimen representativo republicano que, repito, en su último carácter exige y determina la responsabilidad de los magistrados, responsabilidad destinada á este juicio político de que no podrían en ningún caso ser sacados, por lo tanto, sin grave peligro de sistema general? (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

¿Podría negarse que á los gobernadores de las provincias y demás funcionarios les alcanza la garantía del artículo 18 de la constitución nacional, en cuanto no pueden ser sacados de los jueces designados por la ley con anterioridad al hecho de la causa? Esto es esencial y si en el derecho común está establecido como un principio incontrovertible y fundamental la garantía del artículo 18 de la constitución, se percibe fácilmente la gravedad que esta garantía reviste en cuanto se aplique á un gobernador de provincia que tiene en el fuero excepcional, diré, del juicio político la garantía más preciosa de la constitución. (*¡Muy bien! Muy bien!*)

Estas, señor presidente, son cuestiones políticas que tienen su tribunal político y que son en absoluto ajenas á la jurisdicción ordinaria que el congreso distribuye al dictar las leyes de justicia.

En cuanto al artículo 31 de la constitución, que se ha invocado también en defensa de los procedimientos que se trata de suprimir, debo observar que no es atributivo de jurisdicción judicial, es un artículo que deslinda soberanías legislativas, porque se establece la competencia de los jueces en otros artículos, como el 100 y 101 é inciso 17 del artículo 67.

Esta doctrina, ligeramente expuesta y con todas las dificultades propias del que habla, reposa, señor presidente, sobre autoridades que debo traer para sustentar, ya que no el despacho tan autorizado por el proyecto primitivo y por las firmas de mis colegas de comisión, el informe con que ellos han querido honrarme.

«El hombre público—ha dicho el doctor Tejedor—que tiene parte en el gobierno de cualquiera de estos modos,—como miembro del poder ejecutivo, legislativo ó judicial,—está revestido de una misión pública cuyo libre cumplimiento interesa á la sociedad. Su autoridad resulta de una delegación directa ó indirecta del pueblo, y nadie debe, hablando en general, tener la posibilidad de atentar contra este mandato ó de trabar su ejercicio. No es un privilegio de la persona, sino de las funciones, aunque por razón de ser la persona indivisible, cubra en ciertos casos todos sus actos.»

Me parece que estas palabras de una autoridad tan respetable como la del doctor Tejedor, precisan perfectamente el alcance de la cláusula agregada al artículo 3º.

El señor doctor Malaver, en una vista luminosa relativa á un caso análogo, extiende el mismo razonamiento.

«Si tales son los preceptos—dice—de los artículos 5.º y 106 de la constitución nacional y si ellos garanten á las provincias el libre ejercicio de sus constituciones que se han dado, debemos forzosamente concluir que los privilegios acordados por una constitución provincial á los miembros de su respectivo poder legislativo son los mismos de que gozan los legisladores y diputados al congreso,—aquí se trataba de undiputado á la legislatura de La Rioja—están amparados y garantidos por la constitución nacional y forman parte, si así puede decirse, de esta última. Vienen entonces á ser la ley suprema de la nación de preferente aplicación á todas las otras, según los

términos del artículo 2.º de la ley de 14 de septiembre de 1863, antes citada.»

«Ningún peligro serio—agrega—puede seguirse de la estricta aplicación de estos principios mientras que de su no observación resultaría el desconocimiento de la misma forma federativa de gobierno, adoptada por la nación después de largas y sangrientas luchas.»

Nuestra jurisprudencia nacional, señor presidente, ha seguido siempre—como lo hace notar el doctor Moyano Gacitúa, hoy miembro de la suprema corte—aquellos grandes principios de interpretación y los ha aplicado en varios fallos invariablemente, sin discrepancia alguna. Me permitiré citar ligeramente los fallos que registra el mismo doctor Moyano Gacitúa.

«Ha declarado que si las autoridades provinciales que violan las leyes no pueden ser demandadas en los tribunales de la nación, pueden serlo los agentes y ejecutores de los mandatos inconstitucionales. Blanco v. gobernador Nazar de Mendoza, tomo I, pág. 170 de los fallos de la Suprema corte.

«Que el gobernador de San Luis, nombrado sin intervención alguna del gobierno federal, no puede, mientras dure en el ejercicio de sus funciones, ser criminalmente enjuiciado ante el poder ejecutivo de la nación sin que por el hecho mismo quedase comprometida la independencia de los poderes provinciales, que es esencial en el orden constitucional.» Procurador fiscal de San Luis v. gobernador Lucero, tomo IX, pág. 537, año 7.º Y por último, que el juez de sección, al procesar criminalmente al gobernador de la provincia de Corrientes fundado en que la ley no hace distinciones de personas, ha cometido un error, pues la distinción está en la naturaleza de las instituciones federales en las cuales es de esencia la independencia de los gobiernos de provincia y la seguridad é inviolabilidad de sus poderes públicos; y ésto dejaría de existir desde que esos poderes fueran criminalmente responsables por sus actos, en la misma forma que los particulares.» (Caso del gobernador Gelabert, de Corrientes, tomo XVI, pág. 70.)

He necesitado molestar la atención de la honorable cámara con la cita de estas opiniones y de esta jurisprudencia, que me parecen, al respecto, concluyentes.

Se argumentará, señor presidente, con la impunidad; pero, fuera de que este

punto, lo trató elocuentemente el señor diputado Carbó, podría decirse, en contra del argumento, que aun cuando resultase ineficaz ó ilusorio en algunos casos el juicio político, nunca, jamás, podría deducirse de esa ineficacia la jurisdicción de la justicia ordinaria ó federal, que no la podría tener en ningún caso para juzgar y condenar á magistrados sometidos al mismo juicio político, sin el retiro previo de sus inmunidades.

Si me adelantara, señor presidente á algunas objeciones, lo que no quiero, diría que el caso de delitos cometidos por funcionarios sometidos al juicio político en las provincias, dentro del territorio nacional, no agrega, á mi juicio, ninguna novedad al asunto en discusión; desde que, por un lado, el hecho de cometerse un delito en territorio federal, sólo contribuiría á afectar mayormente la responsabilidad del magistrado que lo cometiese, en su respectiva jurisdicción, y que, por otra parte, cubriéndole las garantías y los fueros de la constitución, cualquiera que fuese el lugar del delito los resultados serían exactamente los mismos.

Pidiendo excusas á la honorable cámara por el desaliño visible de este informe, diré para terminar que el despacho de la comisión se ha informado en la reforma constitucional del 60, que borró el juicio de los gobernadores ante el congreso de la nación, y en el propósito de todos aquellos que han visto, como ha dicho don Bernardo de Irigoyen, y de todos los que quieran seguir viendo á la nación en las provincias y á las provincias en la nación. (*Muy bien! Muy bien! Aplausos*).

Sr. Mugica—Pido la palabra.

Señor presidente: aún cuando la mayor parte del informe que acaba de producir con su brillo habitual el señor diputado por la capital se ha referido á la segunda parte del artículo tercero, sobre la que he manifestado mi disidencia con la mayoría de la comisión, creo que no puedo, reglamentariamente, contestar su discurso sino cuando esté en discusión el referido artículo, y me anticipo, desde luego, á declarar que será esa la oportunidad en que tomaré en cuenta sus argumentos.

Sr. Carlés—Pido la palabra.

Ni afectos ni desafectos partidistas, ni intereses ni preocupaciones políticas, motivan estas palabras, destinadas exclusivamente, por su brevedad, á salvar la dignidad de mis opiniones.

Votaré en contra de este proyecto, porque lo considero inoportuno, incompleto y ocasional.

Inoportuno, porque, como lo acaba de manifestar el señor miembro informante de la comisión, hay asuntos que ventila la justicia y que corresponde que la justicia los resuelva, sin presión legislativa ni comentarios anticipados. Incompleto: inspirándome en las propias palabras del señor diputado por la capital, el cual, oponiéndose al despacho de la comisión, con motivo de la discusión anterior á la presente, demostraba que la ley electoral correspondía modificarse y estudiarse en su conjunto, en su nomenclatura electoral, y no por partes. Y ocasional, porque, como es de pública notoriedad, está de por medio y en tela de juicio la conducta observada por el señor gobernador de la provincia de Buenos Aires en las últimas elecciones de la capital.

No quiero ni que impulsado por estas circunstancias, ni tampoco obligado por la necesidad de discutir, silencie mi voto. Estas razones son bastantes para que la secretaría se digne anotar mi voto contrario al despacho general formulado por la comisión. Nada más. (*Muy bien! Muy bien!*)

Sr. Oliver—Pido la palabra.

Por análogas razones, pido que conteste mi voto en contra del despacho de la comisión; y debo agregar que los fundamentos que se han dado en su apoyo no han tenido la virtud de convenirme á pesar del brillo con que los ha expresado el miembro informante.

Creo que se puede vestir la mayor irregularidad legislativa con el ropaje constitucional. Esto no es una novedad aquí ni en otras partes. La constitución es una serie de principios; y muchas veces, los actos de los poderes públicos no se encarnan en esos principios. Hay una corriente de hechos, que es la que hace la historia nacional, que no es la que está escrita en la constitución y en las leyes, sino en los actos producidos por los hombres, ya sea que se llamen pueblo ó que se llamen autoridades. De manera que una misma constitución puede aplicarse á un gran pueblo, como el de los Estados Unidos, como puede aplicarse á la república esa de Liberia, fundada por los negros libertos en la costa de Africa, que adoptó la constitución de los Estados Unidos; un mismo tipo de constitución para dos pueblos de tipos emi-

nentamente diferentes en su manera de ser. Todas las repúblicas de Sud América se están debatiendo, y alguna de ellas en extertores de agonía donde no se consigue sino el predominio momentáneo de unos intereses sobre otros; y por esta razón también creo que es hasta cierto punto revolucionaria la primera parte del discurso pronunciado por el señor miembro informante, al afirmar que las asambleas legislativas deben proceder con arreglo á la necesidades del momento, necesidades políticas, y sin un criterio superior que regule sus actos.

Sr. Vedia.—[Cómo voy á decir éso! ¡Ni por estar á mi lado me ha oído bien el señor diputado!

Sr. Oliver.—Yo creo que las asambleas legislativas deben ajustarse á los principios constitucionales y á los fines que la constitución se ha propuesto expresados en su preámbulo. No creo que sus resoluciones deban ser ocasionales ni de carácter político y para satisfacer intereses particulares y de partido.

Sr. Vedia.—Todo eso va por cuenta del señor diputado; no me lo haga decir á mí.

Sr. Oliver.—Todo eso va por cuenta del propósito evidente de esta ley.

Yo creo que la disposición que fué votada por esta cámara, por el senado, que se convirtió en ley y que se ha aplicado, es perfectamente constitucional y no afecta en manera alguna las autonomías provinciales, ni los derechos de los funcionarios dentro de esas autonomías. Creo que en materia electoral, por disposición expresa de la constitución, las provincias son solamente distritos de la nación, que, por consiguiente, dentro de esos distritos electorales, los miembros de los gobiernos provinciales son agentes del gobierno nacional á los fines para que se ha constituido el gobierno nacional.

La misma constitución en una de sus disposiciones establece que será el congreso nacional el que dicte la ley electoral, y por consiguiente, es una de las facultades del congreso dictar esa ley.

Sr. Roca.—Reclamo y protexto, como representante de una provincia argentina, la clasificación y alcance que quiere darse á las divisiones fundamentales de la República que tienen sus raíces en la historia constitucional y política. No somos distritos, somos es-

tados federales cuyo conjunto compone la nación argentina.

Sr. Oliver.—Me refiero á una cláusula expresa de la constitución, que dice que á los efectos de las elecciones nacionales las provincias son simples distritos electorales, y contra estas palabras de la constitución no valen protestas.

Sr. Vedia.—Con ese criterio...

Sr. Oliver.—Por consiguiente, dentro de este criterio, siendo el congreso quien debe dictar la ley electoral, los efectos de esa ley no pueden ser aplicados diferentemente en una provincia que en otra; no pueden tener un alcance diferente en una provincia que en otra; es una ley de carácter general.

Si aceptáramos que las constituciones provinciales pueden venir á modificar la ley electoral, esa ley será diferente en una provincia y en otra, porque las constituciones provinciales no son todas iguales.

Sr. Vedia.—Están bajo la garantía de la constitución nacional...

Sr. Oliver.—Ruego al señor diputado que no me interrumpa.

Por esas constituciones pueden tener más inmunidades los funcionarios públicos en unas que otras.

En la provincia de Buenos Aires estas inmunidades se extienden naturalmente á los miembros de los poderes y á los miembros de las convenciones constituyentes, así como también á los cuerpos electorales; de modo que se cuentan por cientos las personas que están acogidas á esa disposición, que es amplia y que tiene por objeto garantizar la independencia de los funcionarios.

De manera que nos encontraríamos con una ley nacional de efectos diferentes, según fueran las inmunidades que hubiera en las diferentes provincias.

Por otra parte, se trata de una ley electoral dictada por el congreso sobre la organización de los poderes federales; por consiguiente, no podemos admitir que esta ley, que tiene por objeto constituir los poderes de la nación, puede ser implícitamente derogada por disposiciones provinciales que tienen otro fin.

Son estas las consecuencias que esta ley puede tener. Voy á votar en contra de ella en general. Pido que conste mi voto en ese sentido.

Sr. Carbó.—Pido la palabra.

Fundado de la manera incontrvertible que lo ha sido este proyecto por el

señor miembro informante de la comisión de negocios constitucionales había resuelto: no agregar una palabra más sobre la materia. Pero las últimas palabras pronunciadas por el señor diputado me obligan á hacerlo á mi pesar.

Desde luego, señor presidente, yo no tengo por qué ocultar los motivos determinantes de un proyecto de ley; pero reclamo de todos los señores diputados,—derecho que á ninguno habría de permitir arrebatarme,—reclamo, decía, el cumplimiento de la obligación parlamentaria de no atribuir á nadie intenciones que no manifiesta.

Cuando se funda un proyecto de ley, se dan los motivos determinantes. Yo los he dado en este caso; por consiguiente, no tiene por qué dudar el señor diputado de cuál es el propósito manifestado de esta ley, queriendo atribuirle nada más que un alcance inmediato á un caso personal especial.

Si ese solamente hubiera sido el motivo, yo hubiera presentado lo mismo proyecto, y ¿por qué no había de hacerlo? ¿Acaso por el temor pueril, por la cobardía cívica de que á un representante del pueblo se le puede atribuir que hace una ley para servir á un interés político, acaso por eso había de permitir que se violen los preceptos de la ley? (*Muy bien! Aplausos*).

¿No faltaríamos á nuestro deber todos, aun los adversarios políticos del magistrado acusado en este instante, si teniendo la plena conciencia de que se atropellan los fueros de ese magistrado, nos cruzáramos de brazos?

—El señor diputado Oliver hace una observación en voz baja.

Yo le contesto al señor diputado sobre la forma en que ha argumentado. El señor diputado ha argumentado sobre intenciones supuestas y yo argumento sobre palabras pronunciadas.

Sr. Oliver—El señor diputado...

Sr. Carbó—Le he dicho al señor diputado que si yo no hubiera tenido más propósito que el que ha atribuido á la presentación del proyecto, de la misma manera lo habría presentado!

Sr. Oliver—Perfectamente!

Sr. Carbó—Entonces argumento sobre las palabras del señor diputado cuando ha atribuido al proyecto móviles inconfesables.

Sr. Oliver—No le atribuyo al señor diputado ningún móvil inconfesable.

Sr. Carbó—Ha hecho mal entonces el señor diputado en decir que tenía un propósito determinado. He tenido el propósito que dije al informar: Defender las autonomías de las provincias de los avances de jueces ignorantes. (*Muy bien! Aplausos en las bancas y en la barra.*)

¡Es esel!

He empezado por decir que parecería extraño que en un país federativo tuviera que proyectarse en una ley reglamentaria, como es la ley electoral, una disposición que es casi un axioma constitucional. Pero estamos viendo, por desgracia para el país, no obstante todas las declamaciones que se hacen en pro de la libertad judicial, que hay hombres que no saben sobreponerse un momento á la ofuscación partidista, al error ó la ignorancia, y que persisten en el error, lo que debe alarmarnos á todos los que somos hijos de las provincias—de esas provincias que por segunda vez el señor diputado califica de simples distritos. Ya el señor diputado anteriormente, al fundar sus opiniones respecto de la elección por circunscripción, ha dicho con todas sus letras, como puede verse en el «Diario de sesiones», que cuando los constituyentes se propusieron organizar nuestro sistema electoral, quisieron deshacer las provincias...

Sr. Oliver—No he dicho eso.

Sr. Carbó—Está consignado en el «Diario de sesiones».

Sr. Oliver—Está equivocado.

Sr. Carbó—No estoy equivocado, y apelo al testimonio de la cámara que lo escuchó.

Lo dijo el señor diputado y debe estar en el «Diario de sesiones». Si no está allí, será porque se ha suprimido, y no será lo único que se ha suprimido en ese debate!

Sr. Oliver—No he dicho eso, sino que se quiso sustituir la denominación *provincia* por la denominación *distrito*.

Sr. Carbó—Dijo que era necesario que se borrara de los diputados el concepto de provincias.

Y entonces pues, con un criterio así eminentemente unitario, es claro que es lógico el señor diputado en la actualidad. ¿Qué le importan los fueros de las provincias si piensa en un gobierno unitario?

Sr. Oliver—Yo no pienso en gobiernos unitarios! (*Risas*).

Sr. Carbó—Pero esas son las ideas del señor diputado. Es que á veces, señor diputado, permanecemos bajo la obsesión de un principio sin darnos cuenta de ello. Es así como somos federales ó unitarios desde la cuna sin haberlos detenido jamás á analizar por qué nuestros padres lo fueron. No conozco los antecedentes políticos del señor diputado é ignoro que sea unitario por tradición, pero á nadie escapa que las ideas que ha manifestado son genuinamente unitarias.

Era natural, pues, que dadas mis convicciones á este respecto, me sintiera dispuesto á presentar en cualquier momento un proyecto de ley poniendo en claro las garantías que el congreso quiere guardar. Somos representantes de un pueblo federal, y no podemos consentir qué se declaren nulos y sin ningún valor los privilegios que defienden á altos mandatarios y que son parte de las instituciones provinciales, para el cumplimiento de las cuales es necesario que tengan la garantía de la nación por medio de sus leyes.

Esto contestando á las opiniones manifestadas por el señor diputado. Ahora, volviendo al cargo de que la ley puede ser ocasional, claro es que la ocasión puede haber determinado la presentación del proyecto; pero siempre obedeciendo á móviles patrióticos y con raíces más hondas que las que se piensa, como no escapará á la ilustración de los señores diputados, cuando se trata de amparar las autonomías provinciales amasadas con sangre!

Sr. Iriondo — Nunca fué necesaria esta ley.

Sr. Carbó—Pero es necesario que se repitan estas declaraciones de principios, precisamente para que se recuerde á los jueces que existen en la capital federal que pertenecen á un distrito que en cierta forma es casi una provincia, porque tiene su justicia propia y todos los demás elementos de gobierno que una provincia debe tener, siendo considerada á este efecto como tal, puesto que envía dos representantes al senado como todas las provincias; y para que sepan dichos jueces que la mera circunstancia de llamarse nacionales no les da facultad para invadir los fueros de las provincias. (*¡Muy bien!*)

Tal ha sido el objeto del proyecto; tales han sido los propósitos, que yo entiendo patrióticos, del proyecto que

tuve el honor de informar! (*¡Muy bien! Aplausos en las bancas y en la barra.*)

Sr. Iriondo—Pido la palabra.

Lamento, señor presidente, que un exceso de celo del señor diputado por Buenos Aires doctor Castro, como en el caso que recordaban algunos señores diputados con motivo de la discusión de la ley electoral, no me haya permitido tomar la parte que hubiera deseado en este proyecto, que considero de verdadera importancia. Me habría limitado á votar en contra, dados esos antecedentes, si no fuera por las palabras que acaba de pronunciar el señor diputado por Entre Ríos, que me resuelven también á decir dos, para significar, con toda franqueza, cómo se perturba muchas veces el criterio de aquellas personas que por su ilustración y por sus antecedentes pueden servir de guía, como han servido en muchas ocasiones, á las deliberaciones de esta cámara.

El señor diputado, que en el curso de la reforma electoral nos hablaba de partidos autonomista y nacionales, nos trae una cuestión que no es de actualidad, porque el sentimiento de la autonomía lo tenemos por igual todos los diputados, seámos diputados por la capital ó del interior; pero si se llegara á tratar cualquier asunto que interesara verdaderamente las autonomías de las provincias, yo estoy seguro que unánimemente, sin disidencia de ningún género, todos habríamos de estar con cualquier proyecto que tendiera á garantizar esas autonomías.

Aquí no se trata de eso, señor presidente; aquí no se trata de autonomías provinciales; las mismas palabras del señor diputado lo están demostrando. No; aquí se trata del caso de un gobernador que abandona las funciones de su cargo, puesto que había delegado el mando y se trasladaba á la capital...

Sr. Carbó—¿Y quién le puede quitar sus fueros? No son renunciables!

Sr. Iriondo—Digo que había abandonado sus funciones y se había trasladado á la capital federal á intervenir y á trabajar en una campaña electoral, violando la ley de elecciones nacionales, y al que se pretende apartar de sus jueces naturales.

No basta este proyecto: hay algo más. Al juez que entiende en la causa, el señor diputado lo llama ignorante, parcial y lo denigra. ¿Por qué, señores diputados? Si un juez es ignorante, si es parcial, tratándose de un funcionario como

el gobernador de la provincia de Buenos Aires ¿qué garantías puede ese juez ofrecer á los demás ciudadanos? ¿Por qué si ese juez es ignorante y parcial, el señor diputado no cumple con su deber, como lo creo capaz de hacerlo, por qué no inicia en la cámara el juicio político que corresponde, por qué deja que los demás ciudadanos estén amparados por ese juez ignorante y parcial?

Sr. Carbó—Es muy cómodo al señor diputado decir que yo he determinado con esas palabras al juez que entiende en la causa. Yo he dicho que me levanto para evitar que jueces de esas condiciones...

Sr. Iriondo—Pero dada la forma en que lo ha dicho, nosotros teníamos que entender...

Sr. Carbó—¡Entienda lo que quiera el señor diputado; pero no me haga decir lo que yo no he dicho!

Sr. Iriondo—Pero al referirse á un juez ignorante, tratándose de esta cuestión, es indudable que se refería, como yo lo he entendido, al juez que conoce en el asunto.

Sr. Castro—¡No se puede formar juicio político por ignorancia! A los ignorantes hay que sufrirlos, no más!

Sr. Iriondo—Acepto con gusto la interrupción que me ha hecho el señor diputado, para demostrarle que sus conocimientos profesionales no son muy sólidos en esta materia.

Sr. Presidente—No se pueden hacer cuestiones personales.

Sr. Iriondo—Precisamente, por el juicio político, se puede no sólo separar á los funcionarios malos por sus faltas, sino también á los funcionarios que no sirven. Este es el carácter del juicio político entre nosotros. Yo creo que tratándose de un juez ignorante, la cámara no puede cerrarse el camino que tiene para apartarlo de su puesto, á fin de que no haga el daño que hace á la sociedad. El señor diputado está completamente equivocado.

La mayoría de la comisión de negocios constitucionales, en este caso, ha cambiado completamente en su modo de pensar, con relación á la anterior reforma de la ley electoral, por cuanto entonces desechó reformas trascendentales, reformas requeridas por el poder ejecutivo é iniciativas de algunos señores diputados, para presentarnos un despacho en una forma limitada. Ahora ha cambiado la oración por pasiva, y para disimular esto, que no tiene otro pro-

pósito, en sus alcances y en sus consecuencias, que apartar al gobernador de Buenos Aires, señor Ugarte, del poder de la justicia, ha querido introducir otras reformas que pueden ser muy convenientes, pero que no acompañaré con mi voto, porque no he tenido tiempo de estudiarlas.

Entonces, pues, quiero dejar constancia de que como diputado y como miembro de un partido, lamento que no haya aprovechado el gobernador de Buenos Aires, señor Ugarte, esta ocasión para vindicarse ante la opinión pública. Está acusado de haberse trasladado á la capital á servir de empresario político con ofertas, con dádivas, con violaciones flagrantes de la ley, lo que si es reprochable en cualquier ciudadano, es altamente reprochable y pernicioso tratándose del jefe de una provincia argentina.

Quiero dejar constancia de mi voto en contra y también de esta incertidumbre—¿por qué no decirlo?—que embarga mi espíritu, cuando veo que con estas leyes no hacemos sino traer mayor desprestigio para la nación y para sus autoridades. ¡Consentida la violencia cuando viene de arriba, no es posible rechazarla después cuando viene de abajo!

Sr. Palacios—Pido la palabra.

Sorprendido por la precipitación con que se ha tratado este asunto, pensaba simplemente dejar constancia de mi voto en contra; pero después de las manifestaciones producidas por algunos de mis colegas, creo necesario fundar en muy breves palabras la opinión que voy á dar, en contra del proyecto de la mayoría de la comisión.

Opino, señor presidente, que está en pugna abierta con nuestros principios institucionales esta excepción odiosa que se hace á favor de los gobernadores que cometen delitos electorales, gobernadores que si tienen inmunidades dentro del territorio de la provincia que gobiernan, carecen de ellas en absoluto fuera de ese territorio.

Opino también, señor, que deben aplicarse sin contempORIZACIONES las leyes del lugar en que el delito imputado se haya cometido, sin dar extensión á los privilegios que deben interpretarse dentro de la constitución con un criterio eminentemente restrictivo.

No pretendo dar á las palabras del señor diputado Carbó el alcance á que él se refería, pero sí quiero dejar constancia de que está en la conciencia de

todo el pueblo que la causa ocasional de este proyecto que discutimos es salvar de la justicia del crimen al gobernador de la primera provincia de la república, acusado de haber cometido delitos electorales.

Este proyecto, traído con tanta precipitación, induce indudablemente á que se haga carne en el espíritu popular la convicción honda de que las leyes no se hacen nada más que para los desgraciados, para los que carecen en absoluto de influencia y para que se estrellen ante la prepotencia de los que gobiernan, de los que mandan, que se encuentran parapetados detrás de la impunidad.

Juzgo que es mi deber dejar constancia de estas manifestaciones, al mismo tiempo que aplaudo las decisiones viriles de jueces honestísimos y valientes, que hacen honor al país, como el señor Veyga, á quien posiblemente se ha querido alguien referir en este recinto.

He terminado.

Sr. Naón—Pido la palabra.

En virtud de las mismas razones que acaban de aducir los señores diputados que me han precedido en el uso de la palabra, yo no quiero dejar pasar esta oportunidad sin pedir al señor presidente que haga constar mi voto en contra del proyecto.

Sr. Vedia—Pido la palabra.

Recojiendo las últimas palabras del señor diputado por la capital doctor Palacios, que atribuye el propósito que enunciaba á esta ley, debo decirle que ese no es el propósito, que ese no podría ser, que ese no tendría porque ser, con relación al gobernador de la provincia de Buenos Aires. El gobernador de la provincia de Buenos Aires puede ampararse en los fueros de la constitución provincial, garantidos por la nacional; puede ampararse en preceptos terminantes de la constitución local, entre los cuales bastará recordar el artículo 69 que le impediría, en todo caso, presentarse ante la justicia sin obtener previamente su desafuero. Porque no se trata, señor presidente, vuelvo á repetir, de un caso que pudiera ser juzgado por un juez de primera instancia ó por un juez federal, sin previo retiro de las inmunidades, porque ello vendría á poner la autonomía de las provincias á merced de un magistrado en las condiciones en que es fácil presumirlo, cuando le embargase la pasión, ó, como en

casos bastantes frecuentes desgraciadamente en nuestra vida política, cuando interviniese en la política de los estados, que es precisamente lo que el congreso debe preocuparse de evitar.

Pero quería limitar mi argumentación á este punto: el artículo 69 de la constitución de la provincia establece que el gobernador no podrá presentarse en juicio sino en las condiciones establecidas por ese artículo, es decir, previo desafuero acordado por dos terceras partes de votos de la cámara de diputados de la provincia.

Esto por lo que se refiere al caso á que aludió el señor diputado Palacios. Nada más.

Sr. Presidente—Se va á votar el despacho en general.

—Se vota, y resulta afirmativa.

—En discusión el artículo 1º.

Sr. Varela Ortiz—Pido la palabra.

He votado en general el despacho de la comisión, nada más que porque soy ardiente y decidido partidario de la supresión total, si fuera posible, del artículo 110 de la ley vigente; aquél por el cual se considera un delito federal la simple manifestación de simpatía hecha por un funcionario, tanto del orden judicial como del orden civil, en favor de cualquier candidatura.

Me parece sencillamente monstruosa la existencia de este principio en una ley de la nación. Es, desde luego, el despojo inmediato de todos los derechos políticos que son casi la soberanía propia del ciudadano, sin razón absolutamente ninguna que no sea el pretexto pueril de evitar la presión que puede ejercitar en determinados momentos sobre los empleados que le están subordinados. Y si éste fuera el pretexto, están consignadas en todo el cuerpo de la ley innumerables disposiciones que bastarían por sí solas para impedir tanto el cohecho ó cualquier otro delito, como la presión.

He de pedir, en consecuencia, que se vote por partes, porque participo, hasta cierto punto, de la manera de pensar expresada por el señor miembro informante, atribuida á la comisión, en cuanto quiere que sean penados con arresto de seis meses á un año los miembros de la justicia federal y local de la capi-

tal y de las provincias, comprendidos los jueces de paz, asesores, fiscales, defensores y secretarios, los empleados y funcionarios de policía de la capital y de las provincias, nada más que cuando éstos hagan actos susceptibles de participar en la vida política ó en el acto electoral; pero no cuando se refiere á los empleados del registro civil, y mucho menos con la extensión que la comisión le da al artículo, incluyendo entre los que serán susceptibles de cometer estos delitos, á los empleados del registro civil, de cualquier jerarquía que sean.

El jefe del registro civil, por la ley, es el único encargado, según el artículo 47, de otorgar la partida cívica de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 13. Los demás empleados subalternos no tienen absolutamente función alguna en el acto preparatorio de la elección. El artículo 47 lo determina así, cuando dice que los jefes ó encargados del registro civil en la República, son las únicas autoridades encargadas por la ley de otorgar la partida de que habla el artículo 13.

Y yo me preguntaría: si es un delito que el jefe del registro civil concurre á una asamblea política, ó invite á un amigo á sostener ó prestigiar la candidatura de determinado ciudadano para un puesto electivo, ¿por qué no habría de ser también un delito cuando se trata de inscriptores de cuartel? ¿Por qué no habría de ser un delito cuando se tratara de la mesa inscriptora general? ¿Y por qué ha de ser un delito en los otros casos? Pero, ¿en qué consiste el delito de que un funcionario encargado de expedir las libretas cívicas pueda tener opinión y manifestarla públicamente? ¿Pero porqué ha de ser delito tratándose del presidente de la república? ¿Acaso todos los señores diputados no ven á diario que el presidente de los Estados Unidos recorre el territorio de la Unión en un coche de ferrocarril pronunciando discursos desde la plataforma en cada estación á que llega, prestigiando su propia candidatura? ¿Acaso no ven los señores diputados que á diario los miembros del gabinete inglés concurren á meetings electorales en calidad de leaders de partidos prestigian-do candidaturas para la cámara de los comunes? Y en Francia exactamente lo mismo, y en Alemania y en todas partes!

Y esto es monstruoso, cuando se trata de los altos funcionarios. ¿Por qué el he-

cho de ocupar una posición política elevada supone que existe peligro llevado al extremo de que se le ha de hacer perder á ese mismo ciudadano por la distinción de que goza, de que sus conciudadanos lo hayan elevado á una alta posición, de todos los derechos que emergen de la propia soberanía, entre los que está el de tener opinión y manifestarla públicamente?

¡Recapaciten los señores diputados!

Bastaría este hecho que lo consigno casi gráficamente. Si mañana el ministro de obras públicas escribe á un amigo suyo de Tucumán y le dice: «tengo vivísimo interés en que en las elecciones próximas de renovación mi amigo el doctor Padilla, por ser un hombre de ilustración, partidario del orden y de la paz etc., etc., obtenga el triunfo de su candidatura y le ruego que haga saber esta opinión á los amigos comunes interesándolos para que trabajen en su favor», si suscribiera esa carta el ministro de obras públicas, iría á la cárcel!

Sr. Vedia—Ahí está el artículo 110 de la ley de elecciones...

Sr. Varela Ortiz—Quiere decir, entonces, que si tal hiciera el jefe del registro civil iría á la cárcel. ¿Y por qué? ¡Es sencillamente monstruoso!

Ahora, si lo que se trata de evitar es los malos procedimientos, que hagan uso indebido de las funciones públicas de que están investidos los funcionarios, la ley está llena de artículos en que se castiga con penas severísimas eso, que sí es delito.

Y las consideraciones que aducía en favor del empleado de registro civil, las adujo también respecto de este párrafo segundo del artículo primero que establece que los funcionarios públicos, nacionales y provinciales, que tengan bajo su dependencia, como jefes de repartición ú oficina, uno ó más empleados y los induzcan á adherir á candidatos ó partidos determinados, también deben ser pasibles de pena.

Exactamente hago extensiva la misma argumentación para pedir á mis honorables colegas sencillamente que rechacen y borren de la ley esta monstruosidad!

He dicho. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Sr. Castro—Pido la palabra.

Yo adhiero completamente á las opiniones manifestadas por el señor diputado por la capital.

Este artículo, que ha sido tomado de la legislación española, uno de los pueblos

más atrasados de la tierra, (*visas*) está en pugna con todos los principios liberales que informan nuestra política, y con los principios liberales prácticos establecidos en los pueblos que hemos tomado de modelo, que ya nos ha citado el señor diputado por la capital.

En Norte América, los diputados, el presidente de la República, todos los que aspiran á llegar á los parlamentos tanto nacional como provinciales, presigian su propia candidatura.

Lo mismo sucede en Inglaterra con todos los que aspiran á llegar al parlamento. Los *leaders* concurren á los *meetings*, presentan sus programas y hacen todo género de propaganda por su propia candidatura.

Este artículo viene á hacer un delito de la propaganda política; y me permite llamar la atención de los señores diputados sobre esto,—de manera que el que haga esta propaganda puede ser enjuiciado y llevado á la cárcel de cualquier manera que la haga. Un gesto, una sonrisa, puede ser motivo para que se le acuse ante un juez, por delito de violación de la ley electoral. Una caricatura política que se lleve á la vista de un magistrado, en la que se ridiculiza á una personalidad de la política, por el hecho de producir ese magistrado un comentario cualquiera, motivado por la estampa, puede entenderse que ha cometido un delito que cae bajo la jurisdicción de la justicia federal!

Por estas razones, señor presidente, adhiero á las indicaciones del señor diputado por la capital, y votaré por la supresión de los artículos á que se ha referido.

Sr. Vedia—Pido la palabra.

En lo fundamental, los señores diputados se manifiestan de acuerdo con la tendencia manifestada por la comisión de negocios constitucionales, en cuanto ha modificado el artículo 110 de la ley, contra el cual se ha pronunciado tan elocuentemente el señor diputado por la capital.

Di las razones en virtud de las cuales se mantiene la prohibición en lo relativo á los funcionarios del poder judicial y de policía, con las que el señor diputado Varela Ortiz está conforme. Ahora, la comisión, en lo que se refiere á los empleados del registro civil, también los ha incluido en la prohibición, porque son ellos los encargados de correr con este instrumento precioso de la ley electoral,—la libreta cívica,—y

cuya intervención llegó en cierto modo á ponerse en cuestión con motivo de las elecciones anteriores.

A fin de distanciar á estos funcionarios, encargados del movimiento de las libretas cívicas, de distribuir las en algunos casos, de relacionarlas con el padrón, etc. etc. de la posibilidad de cometer abusos, es que la comisión ha creído prudente mantener la prohibición. Yo haría los mismos votos que los señores diputados Varela Ortiz y Castro, en cuanto se relaciona con los altos funcionarios, pero es que á una mayor figuración corresponde siempre una mayor responsabilidad. Los peligros son mayores cuando se trata de funcionarios encargados de funciones mecánicas, que pueden influir, á veces de una manera decisiva, en los resultados de una elección.

No pudiendo consultar sobre el particular á la comisión de negocios constitucionales, y habiendo el señor diputado propuesto que la cámara vote por partes el artículo, ella decidirá en definitiva.

Sr. Varela Ortiz—Pido la palabra.

Efectivamente, vuelvo á repetir que, en mi concepto, es prudente que se mantenga esta prohibición de intervenir directa ó indirectamente en favor de determinado partido ó candidato á los miembros de la justicia federal de la capital y provincias y á los funcionarios de policía de la capital y provincias; los primeros, porque son los encargados de dirimir todo pleito que se refiere á esta ley; y es obvio mantener la prohibición, en lo que se refiere á los empleados de policía.

Pero, en lo que se refiere á los demás funcionarios, y especialmente á los empleados del registro civil, insistiré en que ellos no sean incluidos en la ley.

El señor diputado observaba hace un momento, que en la comisión había predominado la idea de mantener la prohibición respecto de los empleados del registro civil, por cuanto éstos son los que tienen á su cargo la entrega de la libreta cívica. Pero, señor presidente: ¿cuál podría ser el fraude que pudiera cometer un jefe de registro civil? Falsificar, adulterar, etc. etc., la partida cívica ó cualquier documento electoral? Está penado ese delito por la ley en su artículo 103, que establece: «Será culpable del delito previsto y penado por el artículo 281, primera parte del código penal, todo inscripto ó escrutador ó persona que in-

tervenga en la formación del registro cívico ó en los registros electorales, que en cualquier forma falsifique, adultere, destruya, substraiga ó modifique antes, durante ó después de la inscripción ó de la elección, los registros, actas ó documentos electorales».

Y si está penado ésto, que debe ser delito, ¿por qué se ha de hacer delito del hecho de que un jefe de registro civil, empleado de doscientos pesos, tenga opinión favorable á cualquier candidato, concorra á reuniones, pronuncie discursos en *meetings* en favor de determinadas candidaturas?

El abuso es lo que ha penado el artículo 113; el abuso es lo que debe estar penado en la ley, no lo demás.

De manera que yo propondría que se estableciera el artículo en esta forma:

«Los miembros de la justicia federal y local de la capital y de las provincias, comprendidos los jueces de paz, asesores, fiscales, defensores y secretarios; los empleados y funcionarios de policía de la capital y de las provincias que directa ó indirectamente tomen participación política en favor de partido ó candidato determinado», etcétera, etcétera.

Y suprimiría el inciso 2º.

Sr. Roca—¿Suprime el señor diputado los funcionarios de policía?

Sr. Varela Ortiz—Nó; los mantengo.

Sr. Padilla—Quiero llamar la atención del señor diputado respecto de que la pena del artículo 103 que se refiere al 181 del código penal, es para el empleado que abusando de su oficio, cometa falsedad en instrumentos públicos.

Sr. Varela Ortiz—Eso es para la pena; pero aquí se clasifica el delito.

Sr. Padilla—Me refiero á la supresión de la penalidad del artículo 110 actual para los funcionarios del registro civil. Quedaría, entonces, sin penalidad el hecho de un funcionario del registro civil que expidiera libretas duplicadas.

Sr. Varela Ortiz—Nó, señor; aquí está consignado: «los que adulteren ó modifiquen antes ó después de la elección los registros, actas y otros documentos electorales». El único documento electoral que conozco es la libreta cívica.

Sr. Oliver—Pido la palabra.

Desearía hacer observar una pequeña incongruencia que me parece hay entre este inciso 1º y el artículo 3º de la ley. Por el artículo 3º, se someten

á la justicia federal todos los juicios ó infracciones á la ley electoral. Entonces es muy natural que todos los empleados de la justicia federal, jueces y empleados subalternos, estén castigados por este artículo; pero no veo por qué razón esta prescripción se hace extensiva á los jueces ordinarios de la capital y de las provincias, que ninguna intervención tienen en los juicios que puedan iniciarse con motivo de la aplicación de esta ley.

Sr. Varela Ortiz—Es claro; pueden cometer delitos ordinarios.

Sr. Oliver—Sí, señor; solamente delitos ordinarios; pero los delitos ordinarios no son los definidos por esta ley.

Sr. Varela Ortiz—Hay una porción de delitos que son de la competencia de la justicia ordinaria de la capital, como ser: la compra de votos, la usurpación de estado civil, la detención de un ciudadano dentro de las horas de la elección. Todos estos son delitos que corresponden á la jurisdicción de los jueces ordinarios de la capital.

Sr. Presidente—¿La comisión ha aceptado la modificación propuesta por el señor diputado por la capital?

Sr. Vedia—La comisión no ha podido uniformar una opinión que pueda presentar á la cámara sobre este punto.

Sr. Lucero—Yo entiendo que el haber incluido á dos empleados del registro civil en este artículo significa una garantía para el sufragio, porque son ellos los que manejan las libretas, que han provocado más de una discusión en esta cámara con motivo de las profundas alteraciones y de los malos manejos á que se presta ese instrumento electoral.

Es esta consideración la que me ha inducido á manifestar al señor miembro informante que creo conveniente mantener en este artículo 1.º á los empleados del registro civil, á objeto de que en las funciones que la ley electoral les confiere, con relación á las libretas, no haya, ninguna duda ni desconfianza de la legalidad con que procedan.

Es en nombre de nuestras costumbres políticas, que debemos sancionar esta medida, como una garantía mayor para los partidos. Debemos tener en cuenta la diferencia profunda que existe entre nuestro país y esos pueblos felices que recordaba el señor diputado Varela Ortiz, donde el presidente de la República, los ministros, los empleados de alta categoría de la administración, pueden sin ninguna consecuencia sobre la libertad

electoral pronunciar discursos y aún hacer propaganda á su favor.

Ruego á la honorable cámara que observe la diferencia que hay entre las costumbres norteamericanas é inglesas y las nuestras, y que tenga presente hasta dónde la elección estaría influida si los funcionarios públicos llegaran en su prédica electoral á los procedimientos que en los Estados Unidos é Inglaterra no tienen efecto alguno sobre la libertad del sufragio.

Sr. Varela Ortiz—¡Pero si lo hacen por cuenta de los funcionarios, los jefes de los partidos gobernantes! Son ellos los que hacen saber á los empleados cuál es la opinión de los funcionarios gobernantes!

Entonces ¿á que conduce esto? Nada más que á limitar un derecho de todo ciudadano, sea ó no funcionario, de manifestar libremente sus opiniones.

No hay peligro absolutamente en esta reforma.

Sr. Castro—Hay que llegar á eso. Son los principios que rigen en los pueblos libres.

Sr. Lucero—También es conveniente que la honorable cámara recuerde todas las objeciones que han nacido del manejo de las libretas y que han sido discutidas en los últimos diplomas.

Sr. Varela Ortiz—Pero le observo al señor diputado que si se hubiera llevado ante la justicia á un jefe de registro civil por la comisión de un delito, seguramente habría sido penado.

Sr. Lucero—Sí, señor diputado; pero los delitos que pueden cometer, por la ley son generales; mientras que en el desempeño de esas funciones se pueden cometer algunos delitos de carácter especial, por ejemplo: el simple retardo de la entrega de la libreta.

Sr. Varela Ortiz—No puede haber retardo.

Sr. Lucero—Sí, señor; puede haber retardo que haga ineficaz la libreta.

En el mismo día de la elección, con gran frecuencia, los electores carecen del instrumento electoral; y en ese momento es claro que si el jefe del registro civil tiene comprometida su opinión en un sentido, es muy difícil obtener el duplicado de la libreta.

Yo entiendo que constituye mayor garantía del sufragio el mantenimiento de esta disposición; y me parece que esta consideración es muy importante, y que la honorable cámara debe tenerla en cuenta.

Sr. Roca—Pido la palabra.

Sr. Fonrouge—Le ruego que me la ceda para decir muy pocas.

Sr. Roca—Sí, señor.

Sr. Fonrouge—Como miembro de la comisión de negocios constitucionales, una vez que se ha presentado este punto tan oportunamente á la consideración de la cámara por el señor diputado por la capital, yo, después de conocer las opiniones, especialmente del señor miembro informante, me declaro desligado en este punto de la disciplina á que están sometidos los miembros de la comisión, y creo que realmente las razones dadas por el señor diputado por la capital son muy atendibles.

Se trata de la tendencia de la legislación moderna á combatir la hipocresía. Los funcionarios no deben por el hecho de desempeñar funciones públicas, estar privados del derecho de pensar lo que mejor convenga á los intereses de su patria. Lo que la ley debe castigar es la falsía, el delito, los procedimientos ilícitos, en una palabra.

El jefe del registro civil es un ciudadano como cualquiera otro, que desempeña una función de conciencia; y si tiene una opinión, lo mismo va á obstaculizar la entrega de la libreta prohibiéndole la ley que figure en un comité como no prohibiéndoselo.

De manera que lo que la ley debe castigar es el delito que el funcionario cometa en el desempeño de sus funciones; pero no puede prohibir nunca que los ciudadanos precisamente cumpliendo con el deber de toda democracia de un estado, tomen parte en la elección de los miembros que han de componer el gobierno.

Creo más: que es necesario que los miembros del poder judicial, que forman en este país una clase excepcional contraria á la índole de nuestras instituciones, una clase con mas privilegios, algunas veces se incorporen con franqueza á los movimientos del pueblo y contribuyan á hacer la elección de los poderes públicos con franqueza y sin hipocresías.

Por estas consideraciones, me separo en este momento de la disciplina de la comisión y adhiero á lo propuesto por el señor diputado por la capital.

Sr. Domínguez—Pido la palabra.

Sr. Presidente—La había pedido antes el señor diputado por Córdoba.

Sr. Roca—Declaro que no voy á hacer uso de ella.

Sr. Domínguez—Pido la palabra.

Voy á adherir también á la moción del señor diputado por Buenos Aires, porque pienso que todas estas penalidades establecidas en la ley, es ropaje con que se la viste. Bastaría que dijera simplemente: todo ciudadano argentino tiene derecho á ejercitar sus derechos electorales; los funcionarios públicos que tomen participación en política serán destituidos. Eso sería más eficaz; pero esto no tiene importancia, todo el mundo toma participación en las luchas políticas y no se le puede castigar.

De manera que voy á votar por la supresión de este artículo, porque creo que esto es más moral.

Sr. Castro—Pido la palabra.

Decía, señor presidente, y como me interrumpieron no pude continuar la ilustración de mis ideas, que abogo por la fecunda iniciativa del señor diputado Varela Ortiz, porque ella entraña los principios liberales que deben informar todos nuestros procedimientos. Es preciso que algún día entre nosotros resurja la vida cívica y que se formen los grandes partidos orgánicos que hay en todos los pueblos libres, un partido que gobierna y un partido opositor que trabaja para obtener el gobierno, es decir, por quitar las posiciones á los que las tienen. Es así como se discute la libertad, como se realizan los grandes progresos políticos de las naciones.

Entonces, dejémonos de estos temores: que el ministro tal ha pensado ú opinado de tal manera. Ahí está la ley que lo fulmina, el fiscal que lo acusa y el juez que lo condena. De manera que ese ministro que es un hombre esencialmente político, por el hecho de ser ministro, es un político eunuco? (*Risas*) No, señor presidente; todo hombre político, cualesquiera que sean las posiciones que ocupe, debe conservar toda su integridad de hombre político, ejercitar sus derechos, hacer su propaganda y manifestar libremente la simpatía que tiene por tal ó cual hombre, por tal ó cual causa.

¿Porqué se le ha de trabar á un hombre de esta posición su libertad natural para manifestar simpatías?

Es necesario, señor presidente, que lleguemos á esto: á la formación de los grandes partidos. Y es preciso también que concluyan todas estas hipocresías y que el partido gobernante diga: gobiernamos con los empleados públicos, gobiernamos con todo lo que tengo adherido á la ad-

ministración que dirijo. Más aún: yo iría hasta permitir que el primer magistrado de la nación, ó los que dirigen desde arriba la marcha del estado, dijeran al empleado público que la nación sustenta: usted pertenece á esta administración, usted tiene obligaciones políticas para con ella, porque para eso lo tiene aquí, para eso lo sostiene; y porque no es posible mantener dentro de la administración pública verdaderos adversarios, ó traidores en un momento dado. (*Risas*)

Hasta ahí voy yo y hasta allí quisiera que llegase la ley.

Hablo con toda franqueza, señor presidente, porque no hay nada más chocante que estas hipocresías. (*Risas*) Hacen las cosas; niegan que las hacen. ¿Por qué? El que hace una cosa, el que es autor de un hecho, debe tener la franqueza de manifestarlo y de exhibirlo á la luz del día. Esto es lo que aconseja el buen sentido y lo que aconseja la libertad de que se debe hacer uso—no estas medias tintas de hacer las cosas y ocultar la verdad de ellas.

He dicho.

Sr. Roca—Pido la palabra.

Aprovechando la pequeña demora que se va á producir mientras se forma número para votar, voy á hacer uso de la palabra para adherir en un todo á los fundamentos de mi distinguido colega el señor diputado por la capital á propósito de la modificación al artículo 1.º del proyecto de la comisión de negocios constitucionales.

Este artículo castiga, señor presidente, con una pena de arresto de seis meses á un año lo que de ninguna manera puede ser considerado como un delito. Implica una especie de *capiti diminutio* que se establece sobre determinados funcionarios nacionales ó provinciales, basándose en consideraciones de carácter político y moral de la más alta importancia. Lo que la ley ha querido, es que estos funcionarios, ya sean judiciales ó policiales, á los cuales se comete la ejecución de la ley ó el castigo de los que infrinjan sus disposiciones, estén libre de toda sospecha; y que no solamente no tomen una participación activa en la política, sino que ni siquiera puedan aparecer sus nombres figurando como adherentes á determinados partidos ó colectividades políticas.

Por esta razón, me parece atinada la supresión de los funcionarios del registro civil, sobre todo, con la amplitud

que le da el proyecto de la mayoría de la comisión, comprendiendo hasta los simples escribientes, que no pueden tomar ninguna resolución que pueda causar gravamen á ningún partido ni á ninguna colectividad política.

Sr. Varela Ortiz—Puede agregar que en la capital de la república casi todos los empleados del registro civil son mujeres.

Sr. Roca—Considerando que si estos funcionarios llegan á faltar á la ley electoral, en todos sus términos, se registra el castigo correspondiente, cuando sus actos puedan importar delito ó falta, creo que queda bien limitado el alcance de la ley en los términos que acaba de proponer el señor diputado por la capital.

He terminado.

Sr. Presidente—Se votará por partes, como lo ha pedido el señor diputado por la capital.

—Se vota: «Artículo 1.º Serán penados con arresto de seis meses á un año:

1.º Los miembros de la justicia federal y local de la capital y de las provincias, comprendidos los jueces de paz, asesores, fiscales, defensores y secretarios los empleados y funcionarios de policía de la capital y de las provincias», y resulta afirmativa.

—Se vota: «y los empleados del registro civil dependientes del gobierno de la nación y de las provincias de cualquier jerarquía que sean», y resulta negativa.

—Se vota: «que directa ó indirectamente tomen participación política en favor de partido ó candidato determinado», y resulta afirmativa.

—Se vota: «durante las luchas ó que en cualquier tiempo hagan acto de adhesión ostensible ó de oposición manifiesta con relación á los partidos políticos existentes ó en formación, salvo el derecho de emitir su voto», y resulta afirmativa.

Sr. Varela Ortiz—Hasta ahí queda el artículo. Debe suprimirse el inciso 2.º

—Se lee:

«2.º Los funcionarios públicos nacionales ó provinciales que tengan bajo su dependencia co-

mo jefes de repartición ú oficina uno ó más empleados y los induzcan á adherir á candidatos ó partidos determinados.»

Sr. Uriburu (F.)—Pido la palabra.

Soy el primero en compartir las opiniones del señor diputado que ha hecho la indicación para suprimir el inciso leído, pero no creo que se puedan comparar las manifestaciones y costumbres de Inglaterra y de Estados Unidos, de cuya cultura política estamos aún muy lejos, con las nuestras.

Sabemos perfectamente la coacción que puede ejercer un jefe de repartición con un subalterno; y es necesario no que desaparezca esta disposición, para siquiera pener una valla que les impida exagerar un abuso que, realmente, no se va á poder impedir del todo; de tal manera que es una prescripción de moralidad política que la cámara debe votar.

Sr. Palacios—El artículo no dice que *recomienden* sino que *induzcan*.

Sr. Varela Ortiz—¿Qué querrá decir *inducir*?

Sr. Uriburu—Inducir, quiere decir muchas cosas...

Sr. Varela Ortiz—Pero yo necesitaría saber qué quiere decir *inducir*, para saber qué es lo que constituye este delito raro.

Sr. Lucero—Inducir, de parte del jefe de la oficina, á un empleado, significa presionarlo; es decir: «ó usted vota por las convicciones de su jefe, ó va á la calle».

Sr. Varela Ortiz—El señor diputado miembro informante de la comisión, me da una explicación: quiere decir: «O usted vota por mí ó si no va á la calle».

Sr. Lucero—Sí, señor.

Sr. Varela Ortiz—Bien. Eso es un delito penado en la ley; está regido por el artículo 109.

Sr. Uriburu (F.)—Y ¿en qué forma está penado?

Sr. Varela Ortiz—Es que eso no es lo que el señor diputado quiere decir.

El artículo 109 dice: «El cohecho consistirá en el pago ó promesa de pago de algo apreciable en dinero, y por parte del que desempeñe funciones públicas, en la promesa de dar ó de conservar un empleo. La intimidación consistirá en actos que hayan debido infundir temor de daño y perjuicio á un espíritu de ordinaria firmeza.»

Sr. Lucero—Perfectamente; esa es

Julio 19 de 1905

CÁMARA DE DIPUTADOS

12.ª sesión ordinaria

la definición del delito del que se coloca en los términos de ese artículo.

Sr. Varela Ortiz—Si un funcionario le dice á un subalterno: «Si usted no vota en favor de tal candidato, usted pierde su empleo», incurre en la comisión de ese delito á que se refiere el artículo 109.

Ahora, si el intendente municipal va, en la capital de la república, á una asamblea política y pronuncia un discurso en favor de la candidatura del señor diputado Lucero...

Sr. Lucero—Me ganaría la elección con todos los peones municipales.

Sr. Uriburu (F.)—¡Claro!

Sr. Varela Ortiz—Pero ¿qué inconveniente habría en que así lo hiciera? ¿Por qué el intendente municipal no ha de tener opinión política? ¿Por qué no la han de poder tener el ministro de obras públicas, el ministro de instrucción pública, cualquier funcionario del estado?

Sr. Palacios—Tiene el derecho de emitir su voto. Lo que tratamos de impedir, es que induzca, que presione.

Sr. Varela Ortiz—Eso es otra cosa.

Si el señor diputado no le niega el derecho de elector, no le puede negar tampoco el derecho, inherente al de elector, de hacer propaganda en favor del candidato de sus simpatías.

Sr. Palacios—Se lo niego, porque sabemos cuáles son nuestras prácticas nacionales en materia electoral.

Sr. Varela Ortiz—No, señor. Esas no son nuestras prácticas. Yo le puedo probar al señor diputado que esas no son nuestras prácticas con su propia elección, con la mía. No me ha de citar un caso el señor diputado, por más que sea conocida la simpatía de determinados funcionarios en su favor ó en el mío, jamás podrá citar el caso de repartición alguna que haya podido servir nuestros intereses electorales.

No hay el derecho de privar al funcionario de tener opinión, ni de hacer propaganda.

Sr. Castro—Es un derecho natural. Eso no se puede impedir á ningún hombre libre.

Sr. Varela Ortiz—Ahora, ese derecho no supone el de presionar; eso es ya un delito.

¿Pero cuál sería el resultado de esta disposición? Se podría decir, por ejemplo, que el administrador de aduana no manifestara su opinión política; pero como los capataces de aduana no son em-

pleados de la administración pública, no figuran en el presupuesto de la nación, incurriríamos en la hipocresía de excluir al administrador de aduana de tener opinión, pero irían los capataces con mayor derecho, y estarían, entonces, por sobre el administrador de aduana. El capataz de aduana estaría con más derechos cívicos que el administrador; él sí podría hacer propaganda y manifestar su opinión, pero no sus superiores!

¡No, pues, señor presidente! Yo creo que nunca, á la luz de ningún criterio, puede ser delito el hacer propaganda.

Sr. Vedia—¡Es claro que no debe hacer propaganda! Pero no se puede generalizar la explicación del señor diputado, cuando está frente de un artículo que le establece claramente la clase de propaganda á que se refiere, es decir, la propaganda de un superior sobre un subalterno. Y si el señor diputado argumenta, por una parte, en defensa de la misma doctrina de la comisión que ha establecido este artículo, cuando nos dice: Ya está penada en otra parte la coacción!...

Sr. Varela Ortiz—La coacción!...

Sr. Vedia—Pero el señor diputado sabe bien que esto es cuestión de modos de proceder de los jefes de repartición!

Sr. Varela Ortiz—Está en error el señor diputado.

Yo conozco innumerables empleados que van á las elecciones y votan en contra del candidato de su superior. ¿Por qué no hemos de decir la verdad?

Sr. Lucero—Pero queremos garantizar la independendencia.

Sr. Varela Ortiz—¡Pero si está garantida, la independendencia! En primer lugar, los jefes de repartición no destituyen; y se guardarían muy bien, sin la connivencia del jefe del poder ejecutivo ó de los ministros, de inducir á los empleados á que lo hicieran.

No evita absolutamente nada este artículo. No hace sino restringir lo que constituye un derecho.

Sr. Vedia—Nó, señor diputado.

Sr. Uriburu (F.)—Nó, señor!

Sr. Vedia—Un distinguido diputado me acaba de hacer esta observación: la ley belga castiga hasta la coacción ejercida por el patrón sobre el obrero.

Sr. Varela Ortiz—¡La coacción!

Sr. Vedia—¡Pero si esta es cuestión de términos ó de palabras!

Sr. Uriburu (F.)—Es cuestión de palabras.

Sr. Vedia—A un funcionario de ciertos procedimientos, le bastará inducir amablemente á sus subalternos á que voten por el candidato de sus simpatías; otro, llegará á la coacción, llegará á la amenaza y á la expulsión.

—Se vota el inciso 2.º propuesto por la comisión, y resulta afirmativa.

Sr. Varela Ortiz—Resulta que se ha hecho víctima nada más que á los empleados del registro civil! Con esta sanción se excluye á otros de la comisión de este delito, que es lo que no se ha querido hacer para los del registro civil!

Sr. Vedia—Son cosas distintas; no tienen nada que ver.

Sr. Urriburu (F.)—Son cosas distintas.

Sr. Varela Ortiz—Pido la palabra. Hago moción de reconsideración sobre este artículo.

Varios señores diputados—Que se rectifique la votación.

Sr. Presidente—Se va á rectificar.

Sr. Secretario Ovando—Hay 77 diputados que votan.

—Se rectifica la votación y da el mismo resultado: afirmativa.

—Se aprueba el artículo 2º y se pone en discusión el 3º.

Sr. Varela Ortiz—Pido la palabra.

Nada más que para que quede constancia de que voto en contra de este artículo.

Sr. Mugica—Pido la palabra.

Voy á exponer, señor presidente, las razones que determinan mi disidencia con la mayoría de la comisión sobre la segunda parte de este artículo del despacho, que, como lo ha recordado el miembro informante de la mayoría, ha sido inspirado por el proyecto presentado en la sesión del último sábado por varios distinguidos colegas y fundado por el señor diputado Carbó, con la claridad, precisión y elocuencia que tanto le distinguen.

Una circunstancia especial me obliga, antes de entrar en materia, á hacer una declaración previa, que espero será discretamente interpretada por la honorable cámara.

Tanto el señor diputado Carbó como

algunos otros señores diputados que han fundado su voto en contra de este proyecto, han manifestado que la causa determinante de esta parte de la ley que estamos discutiendo, se encuentra en hechos recientes, que son del dominio público, y que afectan al gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Y bien, señor presidente: todos los señores diputados que mantienen conmigo alguna vinculación personal, y todos aquellos que conocen mi actuación en la provincia de Buenos Aires, saben cual es el concepto,—que entre paréntesis es lo más malo que pueda imaginarse,—que me merece la norma política observada por aquel funcionario.

Pero en este caso, cualesquiera que sean las relaciones que puedan existir entre aquel gobernante y este artículo que está en discusión, yo descarto por completo su personalidad, porque tengo el deber, y creo tener la voluntad suficiente, de tratar este asunto con serenidad y guiado por un criterio exclusivamente constitucional.

Desearía ser breve, señor presidente, porque el estado no muy bueno de mi salud y el deseo de no cansar á la honorable cámara, así me lo aconsejan.

Pero atribuyo á este asunto una gran importancia, y la honorable cámara ha de permitirme que exponga sin precipitación, por lo menos las principales razones que determinan mi actitud.

Creo, señor presidente, que estamos en presencia de un asunto que importa simplemente un caso de interpretación constitucional. Tratamos, señor, de determinar á quienes se refieren y hasta dónde alcanzan las inmunidades establecidas por nuestra constitución en favor de determinadas personas y con motivo de determinadas funciones.

Sólo la ley fundamental, sólo la constitución de la república, puede crear estas inmunidades. La ley no tendría fuerza bastante para hacerlo, pues se oponen á ello las mismas prescripciones de la constitución cuando establecen que todos los habitantes de la República son iguales ante la ley, y que no existen en este país fueros personales de ninguna especie. Las excepciones á esta regla general sólo puede establecerlas la misma constitución; la ley no tiene virtud suficiente para crearlas; y si fuera de la constitución una ley estableciera prerrogativas ó privilegios de esta naturaleza, esa ley sería evidentemente inconstitucional.

Pero como no quiero hacer ninguna de estas afirmaciones que pueden relacionarse con puntos de doctrina, sin presentar inmediatamente una autoridad que me sirva de apoyo, voy á citar en esta parte una de estas autoridades: la opinión de un diario de la tarde de esta capital. Y la cito, señor presidente, porque, aun cuando se trata de un diario, no puede decirse que su opinión, en este caso, sea fruto del apasionamiento ó del partidismo; porque, además, se trata de un órgano de publicidad que se ha distinguido siempre por su espíritu conservador, por la ilustración de sus juicios, y porque, en fin, figura entre sus redactores, uno de los publicistas más notables y brillantes que actúan en ambas márgenes del Plata. Dice así, señor presidente:

«La ley ordinaria ó secundaria, es decir, la ley que puede sancionar este honorable cuerpo, conjuntamente con el senado de la nación, nada tiene que agregar al régimen existente en el punto de que se trata; y lejos de eso, produciría más bien el efecto de poner en tela de juicio, de debilitar ó desvirtuar los mismos principios que se propone afianzar.

«Las inmunidades de que se trata existen ó no existen: en el primer caso no pueden existir sino dentro de la constitución, en el orden nacional ó en el orden provincial; sino existiesen, la ley secundaria sería impotente para crearlas».

Y después de sentar esta doctrina, que á este respecto es la única verdadera, la única aceptable, la única incontestable, el mismo diario, mezclando en sus juicios profundos una de esas espiritualidades que amenizan la lectura, compara la actitud de esta cámara, al tratar de sancionar esta ley, con la estrategia de aquel general que resolvió disparar un segundo cañonazo, porque el primero no había alcanzado el objetivo. Pero se olvidó de decir el ilustrado diario, que en este caso la cámara perfecciona la estrategia, porque el segundo cañonazo lo vamos á disparar con un cañon de menor alcance y de menor calibre.

Bien, señor presidente: establecido este punto de partida, en el que puede ser que esté equivocado, pero sinceramente me considero incontestable, establecido que las inmunidades solo pueden ser creadas por las leyes fundamentales, yo planteo la cuestión en estos términos: ó esas inmunidades á que se refiere el ar-

tículo en discusión, existen por la constitución, ó esas inmunidades no existen por nuestras leyes fundamentales. En el primer caso, este artículo que discutimos, en su segunda parte por lo menos, sería absolutamente inútil é ineficaz. En el segundo caso, sería inaceptable, sería inconstitucional, y por consiguiente nulo; estaría, por lo tanto, destinado á no producir en la práctica efecto de ninguna especie.

Creo, señor, que bastaría esta sola consideración que acabo de formular y que define evidentemente la cuestión en sus verdaderos términos, para no aceptar el artículo, tal como lo propone la mayoría de la comisión.

Pero como en el debate que acaba de producirse se ha sostenido como una noción elemental que estas inmunidades de los funcionarios provinciales, existen ante el fuero de la nación que es el fuero federal, voy á procurar demostrar que esa tesis que se considera tan simple, tan elemental, tan sencilla, es en mi concepto completa y absolutamente falsa.

Ante el fuero federal no puede haber más inmunidades que las que crea la constitución nacional. Yo examino, entonces, la constitución nacional y pregunto: ¿dónde está la prescripción de ese código fundamental que establezca que los gobernadores de provincia, que sus ministros, que los miembros de las legislaturas gocen de inmunidades? No está en ninguna parte.

Y aquí conviene recordar, de paso, que es un principio jurídico, universalmente aceptado, el de que, cuando se trata de excepciones establecidas en el derecho común, esas excepciones deben ser siempre de interpretación restrictiva.

Pero á esta razón, que puedo llamar de carácter positivo y que se funda en el texto claro, terminante y expreso de la constitución, se pueden agregar muchas otras de índole diversa, se pueden agregar razones de carácter histórico, se pueden agregar razones abundantísimas de índole doctrinaria.

El señor miembro informante de la mayoría de la comisión nos decía: las constituciones provinciales forman parte de la constitución nacional. Declaro que me considero sorprendido por esta manifestación, hecha por un señor diputado cuya ilustración sabe él mismo que yo aprecio en todo lo que vale; pero no puedo aceptar semejante doc-

trina, de la que podría decirle lo que le dijo, en una de las sesiones anteriores, el señor ministro del interior: no la he visto en ningún libro. Absolutamente en ninguna ocasión he tenido oportunidad de conocer una doctrina semejante.

Sr. Vedia—Entonces, no ha leído la vista del doctor Malaver.

Sr. Mugica—Permítame. El doctor Malaver podrá haber dicho otra cosa, pero no que las constituciones formen parte de la constitución nacional.

Sr. Vedia—Nó señor; aquí está.

Sr. Mugica—Perfectamente; por haber muerto el señor Malaver, me inclino ante su opinión...

Sr. Vedia—Pero están sus escritos...

Sr. Mugica—...pero me parece que no hay una sola razón que pueda servir de apoyo á esta doctrina; y hay todavía una razón histórica que demuestra el profundo error en que incurre el señor diputado.

La constitución del año 53 establecía que el senado de la nación, antes de ponerse en vigencia las constituciones provinciales, debería prestarles su aprobación. En ese caso, todavía podía haberse dicho que alguna atingencia, que alguna vinculación existía entre el código fundamental de la nación y el código fundamental de las provincias; pero la constitución del 60 reformó esta cláusula de la constitución nacional y estableció que las provincias se darían sus instituciones sin que en ello tuviera nada que hacer el gobierno general.

Sr. Vedia—Pero de acuerdo con los principios y garantías de la constitución nacional.

Sr. Mugica—Perfectamente; para el caso que las provincias reclamaran el amparo de la nación, y nada más, porque es una de las condiciones bajo la cual el gobierno de la nación asegura á las provincias el uso y goce de sus instituciones locales.

Sr. Lucero—El artículo 5º de la constitución nacional, dice: «Cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo [de acuerdo] con los principios, declaraciones y garantías de la constitución nacional, y que asegure su administración, de justicia, su régimen municipal y la educación primaria. Bajo estas condiciones el gobierno federal garantiza á cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones».

Señor presidente: si el congreso en una ley de aclaración, de interpreta-

ción de leyes ya existentes, no hiciera efectiva esta declaración constitucional, yo creo que peligrarían las garantías que este artículo consagra cuando establece que las constituciones provinciales deben asegurar los principios, las declaraciones y las garantías del régimen republicano del gobierno.

Ese es el artículo 5º que yo le pido al señor diputado miembro informante de la minoría, que tenga presente en su interpretación.

Sr. Argerich—Y ese artículo, si me permite una interrupción el señor diputado, establece algo más, acaso en una omisión aparente. Desde el momento en que no enumera el poder ejecutivo, presume que provincias con gobiernos, entidades como estados, han hecho la unión nacional, han hecho la constitución y tienen el pleno amparo del gobierno general.

Sr. Vedia—Si fuera para su mayor descanso, le pediría que me permitiese al señor diputado á mi vez otra interrupción.

Sr. Mugica—Lo que hay es que me veré obligado á tomar apuntes para poder contestar todas las interrupciones. Discuto con la más amplia buena fe, y obedeciendo á un convencimiento profundo. Si las razones de los señores diputados lograran modificar ese convencimiento, yo sería el primero en acompañarles hasta con mi voto.

Sr. Vedia—Porque conozco la sinceridad del señor diputado y porque sé la facilidad con que se expide, es que me permito agregar esta interrupción á las dos anteriores que ha consentido.

El señor diputado, cuando yo me refería á la vista del doctor Malaver, dijo que el doctor Malaver había muerto. Pero vive en sus escritos y en sus obras, le contesté.

Bien, el doctor Malaver dice la siguiente: «Si este privilegio es indispensable al ejercicio del poder legislativo; y si este poder es esencial á un gobierno representativo republicano, me parece incuestionable que dicho privilegio está garantido por la disposición del artículo 5º de la constitución nacional, que asegura á cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones; y que le ordena dictar una constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo que los principios, declaraciones y garantías de la misma constitución nacional.»

Sr. Mugica—Esa es otra cuestión.

Sr. Vedia—Voy á continuar leyendo, señor diputado: «Si tales son los preceptos de los artículos 5 y 106 de la constitución nacional, y si ellos garantizan á las provincias el libre ejercicio de sus constituciones que se han dado, debemos forzosamente concluir con los privilegios acordados por una constitución provincial á los miembros de su respectivo poder legislativo, siendo los mismos de qu  gozan los senadores y diputados del congreso, están amparados y garantidos por la constitución nacional y forman parte, si así puede decirse, de esta última.»

Sr. Mugica—Sí, así pudiera decirse, efectivamente; pero así no puede decirse... (*Aplausos*).

Sr. Vedia—Así puede decirse.

Sr. Mugica—Tengo que proceder, señor presidente, con un poco de orden para contestar á los señores diputados. Empezaré por el señor diputado Lucero, que me ha hecho el favor de concederme una de sus interrupciones.

Me parece que el señor diputado incurre en un error porque examina aisladamente un solo artículo de la constitución. El artículo de la constitución á que  l se ha referido, tiene por objeto exclusivo establecer las condiciones dentro de las cuales el poder nacional ha de prestar su soberano amparo á los gobiernos locales. Para eso les exige varias cosas que son de la m s alta trascendencia para la vida nacional. Les exige que establezcan un gobierno republicano porque no puede admitirse, para el progreso moral del pa s, que en una de las provincias de la rep blica llegara á introducirse un gobierno mon rquico desconocedor de los principios fundamentales de la soberan a popular.

Establece en seguida que debe garantizar la recta administraci n de justicia, porque no puede admitirse que cuando uno de los prop sitos fundamentales de la constituci n nacional es asegurar el bienestar para todos los habitantes del pa s, exista un gobierno local que no acuerde las mismas garant as; y establece por  ltimo el r gimen municipal y los beneficios de la instrucci n primaria, porque esos tambi n, se or presidente, son g rmenes y fuentes de bienestar para toda la naci n.

Pero el se or diputado se ha olvidado de leer el art culo 31 de la constituci n. En ese art culo se establece que no hay m s ley suprema de la naci n que la constituci n nacional, la

leyes que dicta el congreso y los tratados que se celebran con las potencias extranjeras; y que esa constituci n, leyes y tratados priman sobre las constituciones provinciales; y si alguna vez se encuentran en pugna una disposici n de una constituci n provincial con las disposiciones de la constituci n nacional, de los tratados   de las leyes nacionales, ning n valor tiene la constituci n provincial. Y yo pregunto entonces  c mo pueden formar parte de la constituci n nacional aquellas constituciones provinciales, si la primera las declara ineficaces ante la voluntad del congreso?  C mo puede esa constituci n poner encima de una ley fundamental que ella ha incorporado á su propio organismo, la voluntad del congreso que no dicta, sino leyes secundarias?  No es esta la mejor demostraci n de que no es exacta la argumentaci n hecha por el se or miembro informante de la mayor a?

V ase, pues c mo estudiando correlativamente las disposiciones de la constituci n nacional surge la verdad clara   irrefutable.

Sr. Vedia—El art culo 100 se refiere á las limitaciones establecidas en el art culo 67.

Sr. Na n—Es el art culo 31.

Sr. Mugica—Pero viene otra cuesti n muy interesante.

Sr. Lucero—Yo le preguntar a al se or diputado en qu  quedar a el gobierno representativo en las provincias, si no hubiera fueros.

Sr. Mugica—Ahora vamos á ese punto, y puedo asegurar á los se ores diputados que en cuanto me lo ha permitido la precipitaci n con que se est  haciendo este debate, he estudiado la cuesti n. Quiero alejar de la honorable c mara y tambi n del pa s la sospecha posible de que mi actitud en este asunto obedezca á malquerencias. Hablo   nombre de profundas y arraigadas convicciones constitucionales. (*Muy bien!*)

Se ha dicho, se or presidente, que el sometimiento de un magistrado   funcionario de una provincia al fuero federal puede importar un ataque   las autonom as provinciales. T came   mi vez asombrarme de que se sostengan doctrinas de esta naturaleza.

 En qu  se fundan, se or presidente, las autonom as provinciales? Se fundan en el derecho que tienen de gobernarse   s  mismas, de manejar los resortes pol ticos, de constituir sus poderes con

independencia de los poderes de la nación; pero entonces, ¿en qué se perturba ese derecho cuando un funcionario cualquiera es llamado ante el fuero federal á responder, no de sus actos como funcionario público, sino de los delitos que como un individuo del derecho privado comete contra las disposiciones de una ley nacional? ¿En qué se ataca á la autonomía?

El señor diputado que fundó el proyecto que ha inspirado la disposición que estamos discutiendo, señalaba en favor de su tesis un antecedente histórico que conviene también examinar con un criterio tranquilo y elevado, desprovisto de toda preocupación que pueda relacionarse con incidencias del momento.

En efecto, señor presidente: nuestra constitución, que fué sancionada el año 53, después de tantos esfuerzos y sacrificios, consagraba un principio según el cual la responsabilidad de los gobernadores de provincia debía hacerse efectiva en juicio político ante el congreso de la nación.

Conocidos son los acontecimientos que tuvieron lugar antes y después de la constitución del 53.

La provincia de Buenos Aires quedó segregada por algún tiempo, y cuando se pactó la unión nacional, que más tarde debía felizmente convertirse en definitiva, dicha provincia impuso como una de las condiciones para su reincorporación, la de que se suprimiera esa disposición ¿por qué, señor presidente? Porque se la consideraba un peligro para la autonomía de las provincias, para la autonomía política, porque era natural que si el congreso de la nación, en el cual necesariamente debía primar la influencia, ó el partido, ó las tendencias que siguiera el presidente de la república, las autonomías provinciales corrían peligro si los gobernadores debían ser juzgados por el congreso de la nación.

Ese peligro era mayor aún para la provincia de Buenos Aires, que aun cuando en aquel momento selló el pacto de unión con los demás estados, mantenía todavía por acontecimientos anteriores, una división más ó menos profunda con los demás estados. Y como los demás estados debían primar, y primaban en aquel momento sobre la influencia de Buenos Aires, era de temer, con razón, que esa prescripción constitucional pudiera traer resultados per-

turbadores para aquella provincia. Sólo así se explica que esta reforma de la constitución del 53, que es una reforma eminentemente federal, fuera propuesta ¿por quién? por los antiguos unitarios. Los federales habían aceptado esa intervención del congreso de la nación, y fueron precisamente los unitarios los que hicieron la constitución más federal de lo que era.

Pero el señor juez doctor Veyga,—en cuya ignorancia, permítaseme decirlo, yo no creo,—ha contestado ya este argumento, que no es nuevo. En una de sus sentencias, que diré de paso fué confirmada por la cámara federal de apelaciones, dice lo siguiente: «Se ha hecho mérito igualmente de la supresión del juicio político con respecto á los gobernadores de provincia, para suponer que, en tal virtud, la constitución de la república ha querido eximirlos de la jurisdicción de los tribunales nacionales. El artículo 41 de la constitución de 1853 establecía que los gobernadores de provincia podían ser acusados por la cámara de diputados ante el senado nacional, y cabía sostener, bajo la vigencia de ese precepto, que la justicia nacional no podía proceder contra ellos mientras la formalidad previa del juicio político no se hubiese allanado.

«Los reformadores del 60, al enmendar el artículo 41, (45 de la constitución vigente), dejaron sin efecto el juicio político nacional respecto de los dignatarios locales, y al proceder así suprimieron las inmunidades reales ó presuntivas que se había acordado á los gobernadores con relación á la justicia nacional».

Me parece que bastan estas palabras para demostrar que el argumento formulado por el señor diputado Carbó es enteramente contraproducente.

Pero es que hay mucho más todavía.

El juicio político no tiene absolutamente nada que hacer con los juicios penales ordinarios. Y aquí, ya que se ha establecido esta confusión inadmisiblemente, necesito también formular algunas consideraciones.

El juicio político entre nosotros tiene un carácter completamente diverso del que ha tenido en la vieja Europa, sobre todo en Inglaterra. Allí el juicio político sirve para aplicar penas; detrás de un juicio político, puede levantarse un cadalso y caer la cabeza de un ministro; pero entre nosotros, no tiene semejante carácter.

El actual ministro de relaciones exteriores, con quien mantengo vinculaciones amistosas, porque he creído siempre que las divergencias de la política, por más extremas que sean, no pueden afectar en lo más mínimo los sinceros afectos que surgen de la amistad personal—ha calificado con exactitud esta transformación de los juicios políticos á través de los tiempos y de las distancias: «Ha cambiado, ha dicho, de naturaleza al pasar los mares; y, efectivamente, el juicio político en Estados Unidos, y entre nosotros no tiene el carácter de un juicio destinado á producir una pena, es una medida exclusivamente administrativa, que no tiene más objeto que separar al funcionario de las funciones que desempeña.

Pero no quiero, señor presidente, extenderme en largas consideraciones á este respecto y me limitaré á un ejemplo de Curtis, que bien puede servir de ejemplo entre nosotros.

Curtis dice, para demostrar que el juicio político no es un juicio de responsabilidades penales, que puede suceder el caso de un gobernador loco de remate, á quien fuera necesario separar de su puesto para evitar que sus locuras ocasionen perjuicios al país. Y ¿es posible suponer que cuando el juicio se lleve contra un gobernador loco, sea un juicio de responsabilidad penal? ¡Pero, señor, si la locura excluye toda idea de responsabilidad!

No hay, pues, que establecer ninguna analogía entre estos juicios motivados por las infracciones á la ley penal, con los juicios políticos. Estos últimos, sí, podrían tener alguna influencia sobre la autonomía de los estados; pero no la tienen absolutamente los que sólo se refieren á una persona determinada, cualquiera que sea su calidad, cualquiera que sea su ocupación en la sociedad, que infrinja una ley penal.

Pero hay que observar también que el artículo que estamos discutiendo tiene una extensión muy considerable; no se refiere solamente á aquellos delitos con que han sido relacionados los hechos producidos y que se han señalado como la causa determinante de este proyecto, si no á todos los delitos calificados por esta ley electoral. Y yo pregunto entonces: si esta disposición consignada en el artículo es pertinente en la ley electoral, ¿por qué no la consignan también todas las leyes federales que califican delitos determinados? ¿Qué

razón hay para que se haga notar la existencia de estas inmunidades de los funcionarios provinciales, cuando se trata de delitos electorales, y no se la mencione también cuando se trata de todos los demás delitos comprendidos en otras leyes de carácter nacional?

Sr. Fonrouge—Presente el proyecto el señor diputado, y con el mismo criterio lo votaremos.

Sr. Mugica—¡Perdóneme el señor diputado! ¿Cómo quiere que presente un proyecto que en mi concepto envuelve un absurdo?

Sr. Iriondo—Lo lógico sería que lo presentaran los señores diputados que están á favor.

Sr. Castro—Basta con el que se está discutiendo.

Sr. Iriondo—¡Eso es indudable! No lo he puesto en duda.

Sr. Mugica—Creo, pues, señor presidente, que no se puede establecer ninguna relación entre el juicio político y los juicios que pueden determinar la aplicación de las leyes nacionales.

Veamos, ahora, si las razones de doctrina que pueden invocarse apoyan también la tesis que sostengo.

Citaré, desde luego, la opinión de Curtis, (se trata de un autor que comenta el derecho americano que consigna las siguientes palabras):

«Aun cuando una acusación puede envolver una investigación sobre si se ha cometido un crimen contra una ley positiva, sin embargo no es necesariamente un juicio criminal ni hay necesidad alguna en el caso de crímenes cometidos por empleados públicos, para la institución de ningún procedimiento especial por la aplicación del castigo prescripto por las leyes, desde que ellos como todas las demás personas, son responsables ante la jurisdicción ordinaria de los tribunales de justicia respecto de los delitos contra la ley positiva».

«Los objetos de una acusación (y al hablar de acusación, se está refiriendo al juicio político) están totalmente fuera de las penas del estatuto ó de la ley del uso; cuando se trata de penas del estatuto ó de la ley del uso, el procedimiento cae bajo los tribunales de justicia ordinaria».

Veamos, ahora, lo que dice Tiffany. Tiffany, en su obra «Gobierno y derecho constitucional—la teoría americana»,—dice lo siguiente: «Los juicios de acusación pública se refieren solamente al carácter público y al deber público.

En general las ofensas contra la sociedad que pueden cometer tanto los particulares como los empleados públicos, no son materia de acusación.... Y vuelvo á repetir, que acusación quiere decir en este caso, juicio político.

«La constitución dispone que el presidente, el vicepresidente y todos los empleados civiles de los Estados Unidos serán eliminados del empleo en virtud de acusación y convicción de traición, cohecho ó altos crímenes ó delitos; que solo la cámara de representantes tendrá el derecho de acusación y que solo el senado tendrá el poder de juzgar todas las acusaciones. Las ofensas que no están inmediatamente relacionadas con el empleo, salvo los dos casos citados, se dejan al curso ordinario de los procedimientos judiciales y ninguna de las cámaras puede regularmente entender en ella salvo con el fin de censurar ó expulsar á un miembro.»

Me parece que no puede ser más terminante esta opinión.

Me limito á citar dos autores extranjeros, aun cuando se refieren á fuentes de nuestro derecho constitucional; y voy á citar también la opinión de un autor argentino, hombre joven pero de talento y de ilustración indiscutible, que ha prestado ya servicios importantes al país, y que ha desempeñado con brillo y competencia excepcional la cátedra de derecho constitucional en nuestra facultad: me refiero al doctor Manuel Augusto Montes de Oca.

Dice el doctor Montes de Oca, en su tratado de derecho constitucional: «El desempeño torcido del mandato social, puede afectar la forma de un verdadero delito ó puede simplemente herir prerrogativas particulares dignas del mayor respeto. En el primer caso, la ley penal hará sentir su saludable efecto, haciendo pasible al reo del castigo consiguiente y obligándole á indemnizar los perjuicios irrogados. La ley civil auxilia al perjudicado y prescribe reglas para integrarlo en la plenitud de su patrimonio. En ambos casos debe ocurrir á los tribunales de justicia cuya alta misión se ejercita sin distinción de individuos....»

Sr. Fonrouge—Pero no en cuanto al presidente de la república.

Sr. Mugica—Allí voy.

«El presidente puede cometer un homicidio ó una exacción de los caudales públicos; las infracciones caerán siempre bajo la acción de los tribunales del

crimen que procederán así que se despoje al malhechor de su investidura, *si así lo ordenare el código fundamental...*»

«Estas formalidades previas no se confunden con el juicio político, no tienen relación directa ó inmediata con él. En la Argentina están prescriptas respecto de senadores y diputados, á quienes el juicio político no alcanza. No están prescriptas expresamente respecto de los magistrados judiciales, que son pasibles del juicio político.

«El silencio ha dado motivo á que se discuta si deben ó no llenarse las indicadas formalidades.»

Y en una nota colocada al pie de este párrafo se recuerda,—es también una observación oportuna y de fuerza,—que nuestro código penal vigente aplica á los jueces penas de destitución y otras agravantes, precisamente por la comisión de delitos.

¡Pero, señor! En América, que es la patria de la libertad, puede decirse, no se deben discutir estas cosas, á pesar de que las estamos discutiendo, cuando en países de tradiciones aristocráticas se aceptan principios más liberales todavía.

En Francia, donde todavía no han desaparecido esas tendencias á que acabo de referirme ..

Sr. Fonrouge — ¿Me permite interrupción el señor diputado?

Sr. Mugica—Todas las que quiera.

Sr. Fonrouge — Parecería que el señor diputado en su propósito producir efecto....

Sr. Mugica — Perdóneme el señor diputado. Jamás he tenido ese propósito! No tiene derecho el señor diputado de hacerme esas imputaciones!

Sr. Fonrouge—El señor diputado me lleva una enorme ventaja; la inteligencia y la voz; estoy casi afónico. Pero eso no impide que explique yo lo que quiero decir.

He dicho *producir efecto* en el sentido de que quiere hacer prevalecer sus opiniones en el ánimo de los señores diputados haciendo argumentos que no son del caso.

¡Si aquí no estamos discutiendo una ley de impunidad!

Sr. Naón—El resultado es el mismo!

Sr. Fonrouge—Aquí no se proclama la impunidad para el que delinque sino el respeto á las inmunidades de los funcionarios, dentro de la constitución y de las leyes, base indispensable

para que nuestro sistema de gobierno subsista!

Sr. Mugica—El señor diputado no estará afónico del oído, y debe haber percibido que toda mi argumentación va encaminado en ese sentido. Todas las opiniones que acabo de hacer valer quieren decir que los magistrados que cometen delitos establecidos en una ley son enjuiciables ante los tribunales ordinarios.

Sr. Fonrouge—Previo desafuero.

Sr. Mugica—Perdóneme el señor diputado.... Acabo de leerlo; no es cosa de repetir la lectura.

Señor presidente: iba á referirme á la doctrina y á la jurisprudencia establecida en Francia.

Si el señor diputado quiere tomarse la molestia, puede recurrir al tomo XXIII, página 581, del notable repertorio jurídico de Carpentier, y allí encontrará las siguientes palabras: «Si el presidente de la república comete crímenes ó delitos de derecho común, deberá ser perseguido—perseguido!—ante los tribunales ordinarios.» Lea el señor diputado á Laferrière, Jurisdicción administrativa, tomo I, página 655, y encontrará estas otras palabras: «Con relación á los ministros, si la cámara de diputados no toma ninguna iniciativa, el juicio puede tener lugar ante los tribunales aun cuando se trate de crímenes cometidos en el ejercicio de sus funciones.» Y confirma esta doctrina el caso de monsieur Baïhaut, ministro de obras públicas que en 1893 fué acusado y juzgado por corrupción en el ejercicio de sus funciones ante la Corte de asises del Sena. Y si el señor diputado necesita todavía más abundante doctrina en el mismo sentido, le recomiendo que lea á Batbie, tomo III, núm. 88. Y si aún no está satisfecho, le recomiendo que lea á Pierre, Derecho electoral y parlamentario, núm. 609 y siguientes.

Sr. Fonrouge—Pero el señor diputado está completamente fuera de la cuestión. Si aquí no discutimos una ley...

Sr. Mugica—Pero, señor diputado! cuando se trata de delitos calificados por una ley y esos delitos son delitos comunes, corresponde su juzgamiento á los tribunales ordinarios. Así lo ha establecido la doctrina en el derecho constitucional americano; así lo ha establecido nuestra doctrina, máxime, señor, cuando no existen en este caso las inmunidades.

Sr. Roca—¿Si me permite el señor diputado?

Todas las citas que acaba de formular y que concuerdan en un propósito común, no tienden si nó á definir la competencia del alto tribunal político en la aplicación del juicio político; quiere decir que en presencia de un delito común, no es el senado de la nación el que debe proceder á juzgar al presidente de la República por este delito, sinó que, una vez que haya sido desautorado por ese cuerpo, debe ser sometido á la jurisdicción de la justicia ordinaria, lo que no ocurriría si se tratara de un delito cometido en el desempeño de sus funciones, porque entonces el senado, como alto tribunal político, tendría que conocer de ese delito.

Sr. Mugica—Perdóneme el señor diputado. No sé si no he sido suficientemente claro, pero lo que no puedo creer es que no se entienda la lectura que he hecho. Las citas que he traído á la cámara tienen por objeto demostrar que las inmunidades no tienen nada que hacer en el caso en cuestión, cuando se trata de la comisión de un delito del fuero común, sobre todo, tratándose de funcionarios provinciales.

Pero mi argumento principal, señor presidente, consiste en esto: no hay tales inmunidades provinciales ante el fuero federal; ninguna prescripción constitucional lo establece.

— El señor diputado Fonrouge hace una observación en voz baja al orador, quien contesta:

Pero ya he dicho, desde el principio, y nuevamente pido permiso para exponer las razones que sirven de fundamento...

Varios señores diputados—¿Cómo no!

Sr. Castro—Tiene el derecho.

Sr. Mugica—Señor presidente: Si las inmunidades provinciales existieran en la forma que establece este proyecto, ocurriría el siguiente caso: que una ley de la nación no podría cumplirse sin el previo permiso de los poderes provinciales, que es exactamente lo que podría ocurrir en este caso. Hay una ley nacional que castiga con tal ó cual pena á un funcionario que produce tal ó cual acto. Y me parece que no será susceptible de discusión que la eficacia, vigencia y aplicación de las leyes naciona-

les no dependen de la voluntad de los poderes provinciales. La ley manda que se castigue con tantos meses de arresto ó con tantos pesos de multa á un funcionario que cometa tal ó cual acto; pero resulta, en la práctica, que ese funcionario tiene inmunidades; y entonces la justicia federal, que representa la soberanía de la nación en todo lo que se refiere á la aplicación de las leyes, tiene que ir á pedirle permiso á la legislatura de la provincia para que ésta desafore al funcionario á fin de poder aplicarle esta ley. ¿No es esto un absurdo? ¿Cómo es posible que la eficacia de las leyes nacionales dependa de la voluntad de una legislatura de provincia? Ni siquiera de una legislatura, de una cámara!

Si en el caso actual, por ejemplo, —y cito el caso, porque no se me ocurre otro pues desearía apartar de mi imaginación el tal caso,—si en el caso actual, se reuniera la cámara de diputados de la provincia y dice: «no le quito las inmunidades al gobernador», ¿á qué quedará reducida la ley nacional? ¿cómo se hace efectiva, cómo se cumple? Resulta, entonces, que las leyes de la nación dependen de la voluntad de una mayoría política existente en una cámara de provincia! ¡Sostengo que esto es absurdo!

Sr. Robirosa — Habría solamente una suspensión del juicio, hasta que termine su mandato el gobernador.

Sr. Mugica — Esa suspensión no tiene razón de ser, porque no existe en la constitución nacional ninguna prescripción que cree semejante privilegio. ¿Por qué ha de tener un gobernador de provincia un privilegio que no tiene ningún otro habitante del país y mucho más cuando ese privilegio es para ampararlo en la comisión de delitos. *(Muy bien! Aplausos en las bancas.)*

¡Son los peores los privilegios que tienen por objeto amparar á los hombres que cometen delitos! *(Muy bien!)*

Sr. Vedia — Si los privilegios no son para los hombres, sino para los poderes.

Sr. Mugica — Eso es en la teoría; pero en la práctica, en este caso, no hay más amparo que el gobernador de la provincia!

—Varios señores diputados interrumpen simultáneamente al orador.

Sr. Iriondo — Me permito recordar á los señores diputados la manifesta-

ción del señor diputado Roca, reclamando que no se interrumpiera al señor diputado Vedia, que informaba á nombre de la minoría de la comisión en el despacho de la ley electoral; y como en este caso, el señor diputado Mugica está informando también por la minoría de la comisión, solicito para él que no se le incomode con interrupciones.

Sr. Vedia — Si las interrupciones no le incomodan al señor diputado Mugica, le sirven de descanso.

Sr. Mugica — Y en este momento desearía que se me hicieran varias, porque estoy bastante cansado.

Sr. Iriondo — Atendiendo la manifestación, que acaba de hacer el señor diputado, voy á formular moción para pasar á cuarto intermedio.

Sr. Castro — Desearía hablar cuatro palabras después que termine el señor diputado Mugica; y por eso me voy á oponer á la moción de pasar á cuarto intermedio.

Sr. Iriondo — El señor diputado, que no ha concedido aplazar la discusión del asunto por veinticuatro horas, bien podría acceder á que pasáramos á un cuarto intermedio, desde que todos estamos fatigados. Después del cuarto intermedio, tendrá oportunidad el señor diputado de fundar su voto, como ya nos los ha anunciado.

Sr. Mugica — Estoy dispuesto á quedarme hasta las doce de la noche; pero deseo que se me conceda un descanso de cinco minutos.

Sr. Presidente — Invito á la cámara á pasar á cuarto intermedio.

—Se pasa á cuarto intermedio.

—Vuelven á sus asientos los señores diputados y continúa la sesión.

Sr. Mugica — Señor presidente:

Comprendo que la honorable cámara desea terminar esta discusión y voy á tratar por mi parte de complacerla.

En la exposición anterior he procurado demostrar dos partes de la tesis que sostengo: primero, la cuestión relativa al origen y extensión de las inmunidades. Éste es un punto constitucional que no puede ser resuelto por una ley secundaria.

La segunda cuestión es ésta: que no existen en la república para el fuero federal más inmunidades que las que establece expresamente la constitución nacional. Para demostrar esta tesis he

invocado la doctrina norteamericana, y he citado opiniones que me parecen respetables, pero me falta ahora argumentar en otro sentido que es también fundamental; y si se acepta, como tiene que aceptarse forzosamente, que esta cuestión de las inmunidades es un punto constitucional que surge especialmente cuando se trata de enjuiciar á las personas favorecidas por ella, evidentemente tiene que admitirse también como consecuencia lógica que esa es una cuestión que debe estar sometida única y exclusivamente á la decisión de los tribunales.

El congreso no puede, en ningún caso, dictar leyes que tengan por objeto resolver este asunto; no está en sus facultades; esto subvertiría completamente nuestro régimen de gobierno, en el cual las autoridades tienen siempre poderes limitados. Los poderes del congreso son limitados, entre otros puntos, en el siguiente: no puede resolver con criterio judicial las cuestiones que surgen de la constitución.

Y por si acaso este principio elemental y fundamental al mismo tiempo, que acabo de establecer, pudiera ser objeto de controversias, lo que no creo, me permitiré leer á su respecto una cita de Story, el clásico constitucionalista norteamericano.

Dice así: «Nadie puede dudar ni negar que el poder de interpretar una constitución es un poder judicial. Ese principio es aplicable cuando el sentido de la constitución se pone en duda en una controversia judicial». Parecería, señor presidente, que esta página ha sido escrita para el caso actual.

¿No es evidente que el caso que ha determinado esta discusión es uno de los que caen en esta doctrina intergiversable de Story?

Entonces, pues, ¿porqué el congreso toma á su cargo resolver por medio de una ley especial lo que no puede ni debe ser otra cosa que materia de decisiones judiciales?

El señor diputado Carbó ha invocado en esta parte de la discusión una doctrina que considero inaceptable, que considero peligrosa, por que si alguna vez llegara á adoptarse como verdadera, temblarían los cimientos de nuestro edificio constitucional. Nos ha dicho el señor diputado que esta ley tiene por objeto evitar que la ignorancia de los jueces nos dé interpretaciones torcidas de la constitución.

No, señor presidente, no puede aceptarse semejante doctrina. Jamás ha podido suponerse que el congreso por medio de leyes puede subsanar la ignorancia de los jueces. Esa ignorancia en el caso que exista, tiene sus remedios dentro de la misma constitución y esos remedios no son sin duda los que indica el señor diputado por Entre Ríos.

Ahora bien, señor presidente: si esta cuestión es una cuestión judicial; si debe dejarse la interpretación de la constitución en este punto de las inmunidades que es susceptible de una cuestión judicial, á los tribunales creados por la misma constitución; me parece que es razonable, que es lógico y conducente investigar si esos tribunales no se han pronunciado ya sobre la materia. Debo entonces, señor, afirmar desde luego que nuestros tribunales se han pronunciado y que se han pronunciado en una forma que establece jurisprudencia sobre el punto en cuestión.

Tenemos, varios casos, algunos de los cuales han sido citados por el miembro informante de la mayoría: el caso del gobernador Ferrari, por ejemplo, que en juicio de primera instancia ante un juzaado federal fué amparado en sus inmunidades provinciales; pero recurrida esa resolución ante la cámara federal que en definitiva, aparte de la Suprema corte, es la que puede establecer jurisprudencia en esta materia, la sentencia fué revocada. El juicio no concluyó por otras razones, pero quedó establecida la doctrina.

En el orden de las resoluciones adoptadas por la Corte suprema, existen muchos casos. La cámara comprenderá que con la escasez de tiempo de que he dispuesto para estudiar este asunto, no he podido examinarlas todos. Pero puedo decir, sin temor de ser rectificado, que la jurisprudencia de la corte abarca dos fases: una que se refiere á los delitos cometidos por los funcionarios provinciales dentro de su propia provincia y en el ejercicio directo de sus funciones gubernativas; la otra que se refiere á los delitos cometidos por funcionarios provinciales en violación de una ley nacional.

En el primer caso, cuando se trata de delitos cometidos por los funcionarios provinciales dentro de su provincia y en el ejercicio de funciones gubernativas, la corte ha declarado y con razón que esos delitos deben ser juzgados por las mismas autoridades provinciales. Y

esto es una consecuencia evidente de la autonomía política de los estados. Si se trata de la violación del mandato que un gobernante recibe del pueblo de su provincia, es claro que el juzgamiento de esos delitos deben ser producidos por la autoridad creada por el mismo pueblo que le dió el mandato.

Pero cuando se trata de delitos que significan la violación de una ley nacional, entonces, señor presidente, la jurisprudencia varía completamente y se establece que los tribunales federales son competentes sin previo levantamiento de las inmunidades para juzgar á ese funcionario. Asílo establece, señor presidente, la Corte suprema en un fallo cuya parte principal voy á permitirme leer.

En ese fallo, la Corte suprema dice: «según el artículo 100 de la constitución nacional, la jurisdicción federal se extiende á todos los casos (recalco la frase) á todos los casos regidos por las leyes del congreso, abrazando en esta generalidad, tanto la jurisdicción civil, cuando se ejerce directamente, como la criminal.» Y agrega todavía: «De esta regla no se exceptúan los delitos que los gobernadores de provincia ó sus ministros cometan contra la seguridad de la nación, porque se opone á ello la expresión á todos los casos.»

Me parece, señor presidente, que la doctrina no puede estar expresada de una manera más concluyente y terminante.

Sr. Carbó—La corte se refiere á los casos contra la seguridad de la nación.

Sr. Mugica—Permitame el señor diputado. Dice: «á todos los casos regidos por las leyes del congreso», y luego agrega que la expresión «á todos los casos» no admite otra interpretación, aunque estén de por medio los gobernadores de provincia ó sus ministros.

Yo sé, señor presidente, que se me podría argumentar con un hecho muy respetable sin duda, que se ha producido, según me han manifestado en antepasas: que el señor juez federal de La Plata, en el caso que ha servido de motivo ocasional, diremos así, á la presentación de este proyecto, ha resuelto, según parece, que el gobernador de la provincia de Buenos Aires no puede ser justiciable ante los tribunales federales, sin previo juicio político ó sin previo levantamiento de inmunidades. No sé cómo es el fallo.

Pero desde luego, yo podría invocar esa resolución para apoyar la tesis que he sostenido desde el principio, de que esta disposición es innecesaria, porque si las inmunidades existen, los jueces las han de hacer valer, porque esa es su misión, y su obligación, puesto que son ellos los encargados de aplicar la constitución en los casos que se someten á su jurisdicción. Pero yo no creo tampoco que esa resolución pueda tener eficacia suficiente para desvirtuar en lo más mínimo la argumentación que estoy desenvolviendo.

No será seguramente el único antecedente favorable á la tesis sostenida por los señores diputados que votarán por este proyecto, el fallo del señor juez federal de La Plata. Ha habido muchos otros. Ha habido un fallo de un juez de primera instancia de Catamarca, que sostiene exactamente la misma tesis. Pero la cámara federal de apelaciones revocó esa sentencia, y dejó establecido como principio que no hay tales inmunidades cuando se trata de la violación de una ley nacional, cuya aplicación corresponde á la justicia federal.

Los términos del artículo constitucional pertinente no admiten absolutamente otra interpretación. El artículo se refiere á todos los casos regidos por las leyes nacionales, y como si esa sola frase, que tanto influyó para la resolución de la Suprema corte no fuera todavía bastante, otro artículo constitucional confirma la supremacía de la legislación nacional: «aun cuando las constituciones y las leyes locales contraríen ó se opongan á las disposiciones de las leyes del congreso».

Es evidente, entonces, que los privilegios establecidos dentro del estado, dentro de la provincia, y que responden á funciones de orden público que todos conocemos, no pueden tener mayor extensión que aquella que es conciliable con la jurisdicción territorial y con la jurisdicción política de la provincia; pero absolutamente pueden extenderse fuera de esa jurisdicción territorial y de esa jurisdicción política; y ante la soberanía nacional, que es la única existente en el país, no pueden invocarse esas prescripciones de orden público local.

Creo, señor presidente, que he abundado en consideraciones para demostrar la tesis que sostengo, del punto de vista constitucional positivo y también del punto de vista doctrinario; pero me

resta todavía, y en esto voy á ser muy breve, hacer algunas otras.

Señor presidente: si ésta fuera una ley indispensable, aun para un objeto político, que al fin y al cabo es respetable, si ella estuviera llamada á producir en la práctica algunas modificaciones benéficas en cualquier sentido, fuera en el orden de los partidos, fuera en el orden social, fuera en el orden político del país, yo no la aprobaría, pero me explicaría que el honorable congreso la sancionara; pero esta ley no va á tener ninguna eficacia, no va á tener ningún objeto, no va á producir ningún resultado: si ella no hace sino invocar los principios de la constitución, no servirá para nada, porque la constitución vale más que la ley; si, por el contrario, contraría los principios de la constitución, sólo servirá para sentar un antecedente de desprestigio para las sanciones del congreso, porque dejará establecido que el congreso sanciona leyes inconstitucionales, y que las sanciona con una precipitación que no se observa en la generalidad de las leyes.

Por otra parte, este sistema de desviar, aunque sea con propósitos saludables, — lo admito, porque está siempre lejos de mi espíritu el suponer propósitos pequeños en las iniciativas de los señores diputados — esta tendencia de desviar la acción de la justicia en un sentido determinado, por medio de leyes, es el mayor peligro que puede entronizarse en las deliberaciones del congreso.

¿Vamos á hacer, entonces, del congreso un poder absoluto, que absorbe todos los demás poderes; vamos á destruir la línea de separación, perfectamente marcada por nuestra ley fundamental, entre las atribuciones y funciones del congreso y las atribuciones y funciones de los tribunales? ¡No, señor presidente! ¡Eso sí que sería atentar contra el orden constitucional, eso sí que sería suprimir la base fundamental sobre que descansa el régimen republicano, base fundamental que consiste precisamente en la limitación y en la independencia de los poderes que concurren al gobierno del estado!

Entonces, pues, si esta ley no es necesaria, si no es útil, si no va á producir ningún resultado, ¿para qué sancionarla?

Sr. Fonrouge—Eso es á juicio del señor diputado.

Sr. Mugica — ¡Pero, perdóneme el

señor diputado!... Este mismo hecho que acaba de producirse, — la sentencia del juez federal de La Plata — se lo está demostrando. Si el juez federal á que me refiero no ha necesitado esta ley, si ha encontrado en la constitución los elementos necesarios para su sentencia, ¿á qué venir, entonces, á convertir el congreso...?

Sr. Fonrouge — Permítame el señor diputado. El señor juez Veyga acaba de declarar que hay necesidad de esta ley.

Sr. Mugica — Señor presidente: lo que acabo de manifestar es el resultado de mi sincera convicción, y la prueba más palpable es ese mismo fallo. ¿Acaso ha necesitado el juez federal de La Plata que le diéramos esta ley para pronunciarse en el sentido que en su concepto debió pronunciarse con arreglo á la constitución? Y si el juez federal de La Plata hubiese tenido una opinión contraria: si hubiese creído que las inmunidades para los funcionarios de la provincia no existen por la constitución, ¿cree acaso el señor diputado que esta ley le hubiera hecho modificar su juicio? Hubiera fallado en el mismo sentido, declarando que la ley del congreso es inconstitucional.

Luego, pues, subsiste absolutamente la misma consideración.

Me siento fatigado, señor presidente, y creo haber expuesto por lo menos las principales consideraciones que podían servir para fundar las razones del voto que voy á emitir en este asunto; de manera que doy por terminada mi exposición rogando á mis honorables colegas que me perdonen haber molestado demasiado su atención.

He dicho. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Castro—Pido la palabra.

Voy á ser brevísimo; no puedo, sobre todo en estos momentos, abusar de la atención de la honorable cámara ni mucho menos convertir este recinto en un salón de lectura.

Se ha discutido demasiado esta cuestión y se ha discutido, á mi modo de ver, sin razón, el punto constitucional.

Yo por mi parte participo del error que se atribuye á la honorable comisión de negocios constitucionales que ha despatchado en mayoría este asunto.

Esta es una ley de procedimientos, señor presidente, y no creo que ninguno de los señores diputados se haya alarmado cuando se ha hablado de ex-

tralimitaciones, de inconstitucionalidad de la ley que estamos sancionando, puesto que el congreso practica un acto dentro de sus más plenas facultades.

Esta es una ley de procedimientos porque crea un procedimiento que ya estaba establecido en la ley anterior que tratamos de modificar, y de este punto no se debe salir porque es esto lo que aconseja el buen sentido.

Se trata de corregir una deficiencia del procedimiento establecido en la ley modificada, deficiencia que ha inducido en error al juez de quien también ya se ha hablado.

¿Cuál era el deber de ese juez en presencia del hecho, de que también se ha hablado, relativo á un gobernador de provincia? Muy sencillo, señor presidente. El juez de provincia, porque es juez de la capital,—pues hago notar á la honorable cámara que existe esta irregularidad, este absurdo: que estando á cargo estos juicios de los jueces federales en las provincias, habiendo en la capital de la República jueces federales, es un juez de provincia el que se avoca el conocimiento de la causa de que nos ocupamos—el juez, decía, pudo perfectamente, y este era su deber, recibir la acusación, aceptar las declaraciones de testigos, acumular todas las probanzas que se le presentaran; y si de ellas resultaba el conjunto de presunciones que hacen la plena prueba, entonces debió remitir lo actuado adonde correspondía; pero de ninguna manera principiar por citar al gobernador de la provincia de Buenos Aires—ni de ninguna otra provincia—por que se trata de un poder público. Debía tomar lo actuado y remitirlo al ministerio de justicia para que por su conducto, puesto que era este el funcionario que debía intervenir, fuera enviado á la legislatura de Buenos Aires, para que la cámara de diputados, como acusadora, en virtud de los méritos que arrojaran las actuaciones presentadas, procediera á acusar ante el senado á ese funcionario. De otra manera desaparecería la independencia de los poderes públicos provinciales.

Y aquí, por este procedimiento de la cámara, no se trata de salvar ó amparar á tal ó cual persona; se trata de amparar los fueros y de aplicar los principios del derecho público interno de la nación que rigen las relaciones de los poderes nacionales y provinciales. ¿A qué quedaría reducida la independencia del

poder ejecutivo de las provincias si á cualquier juez le fuese dado procesar á su primer magistrado y llamarlo á juicio? ¿Cómo podría el gobernador de Buenos Aires ó de Jujuy venir á estar á derecho por el llamado de un juez ordinario, si la legislatura respectiva de aquella provincia le negase el permiso de trasladarse á la capital federal, por ejemplo? De ninguna manera podría estar á derecho.

Véase pues todo lo absurdo de este procedimiento.

No se trata, por otra parte, de sancionar la irresponsabilidad de los magistrados. De ninguna manera. Los funcionarios que están sujetos al juicio político, una vez que son suspendidos y que han terminado sus funciones, caen bajo la acción de la justicia ordinaria después que ha terminado su mandato.

Las constituciones de provincia no son más que una emanación de la constitución nacional, y todas las constituciones de provincia y la constitución nacional forman el régimen institucional de la República. ¡Esto es elemental!

Pero se nos viene aquí, con este prurito de abundar en citas y erudición, á traer la constitución del 53 al debate...

Sr. Mugica—Yo no la he traído.

Sr. Castro—¿Quién de nosotros no sabe cuáles fueron los principios de esa constitución?

La constitución del 53 daba al congreso, es verdad, la facultad de acusar á los gobernadores de provincia; de la misma manera que daba á la confederación el derecho de intervenir en las provincias cuando quisiera, sin limitación alguna. Pero estos eran principios unitarios que, como tantos otros, fueron derogados en la constitución del 60 que por ventura nos rige, y que contiene el ideal de la mejor forma de gobierno para los pueblos libres de la tierra.

De manera que la tesis del señor diputado es contraria, por los argumentos que hace, á la causa que defiende.

No hay razón alguna para que nos separemos de esto que con plena conciencia está sancionando la honorable cámara: ¡el procedimiento!

De hoy en adelante se habrán evitado estos escándalos que se han producido tratando de llevar á un alto magistrado público ante la justicia ordinaria, para deprimirlo, después de unas cuantas declaraciones de testigos falsos y con un abogado acusador que ha to-

mado por oficio acusar á los que están arriba!

Es preciso que nos cuidemos, porque son los pequeños los que atacan á los grandes, de hacer respetar y vigorizar por todos los medios posibles el principio de autoridad, que está tan relajado, que el día que se debilite más no será posible la estabilidad en el orden social, ni la paz pública, señor presidente! (*¡Muy bien!*)

¡Acusando con testigos falsos! ¡Tendiendo celadas á los magistrados! ¡Llevándolos á la justicia, abogados salidos de las cárceles públicas!

El abogado del acusador, lo he de decir bien alto porque yo no tengo reparo en decir la verdad, que palpita en mis labios,—ese acusador que aparece del gobernador de la provincia de Buenos Aires, es salido de la cárcel pública, señor presidente, donde estubo por estafa, y de donde salió bajo fianza, debido á la complacencia del juez que entendió en la acusación!—Y lo puedo probar!

Respecto al juez Veyga, ha intervenido con apasionamiento político y con parcialidad. No está lejano el día en que este juez sea acusado por la cámara de diputados, que es el acusador que señala la ley, por haber violado las leyes del congreso, por haber cometido el delito de prevaricato! ¡Y no está lejano el día que también llegue á demostrarlo!

Esto quería decir en apoyo del despacho de la comisión de negocios constitucionales, á favor del cual vengo votando desde el principio.

Sr. Vocos Giménez—¿Si me permite el señor diputado?

De desear sería, después del dato que acaba de suministrar á la cámara respecto al juez Veyga, que el señor diputado, siendo miembro de la comisión de investigación judicial, tomara alguna iniciativa....

Sr. Castro—No la he de tomar, señor, hasta que se aplaquen estas pasiones, para que no se diga que vengo con exceso de celo; como si fuese censurable que tuviera celo el que tiene nobles afectos en su corazón y altos ideales en su alma! Yo sé querer también, señor presidente! No sería nada que fuera celoso, cuando se trate de un hombre que estimo y de un magistrado que respeto!

He dicho. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Sr. Presidente Se votará.

—Se aprueba el artículo en debate.

—En discusión el artículo 4.º

Sr. Vedia—Pido la palabra.

Este es el mismo artículo 116 de la ley actual, y se le ha incorporado aquí en la misma forma á fin de que ésta salga más homogénea y comprenda las disposiciones análogas.

Sr. Argerich—Pido la palabra.

Una observación muy rápida, al pasar.

¿Es posible que los acusados políticos de las diferentes provincias puedan comparecer á todos los juzgados de instrucción, con relación á su domicilio, en el término de tres días? No. Entonces, ese término de tres días, que resultaría contraproducente y perjudicial para la defensa de los mismos acusados, pido que se establezca á contar desde la fecha de la citación, contados los términos de acuerdo con las leyes generales.

O en esta otra forma: dentro de los diez días, después de la citación

Sr. Vedia—La comisión acepta, señor presidente, la modificación propuesta.

Y como decía que este artículo era el mismo de la ley en vigencia, debo agregar, como ya manifesté en general, que en el inciso tercero se ha agregado la intervención del ministerio fiscal.

Sr. Argerich—En el inciso 5º, del mismo artículo, voy á pedir á la comisión quiera suprimir las palabras: «y la sentencia», en adelante.

No hay razón alguna para derogar en estos juicios lo que es regla general de amparo de todos los procesados de la República. Los procesos, cuando no comparece el procesado, se suspenden hasta que el procesado comparezca á estar á derecho. No es posible que tratándose de una delincuencia que tiene penas mucho menores que otras, se haga una excepción y se permita continuar el juicio aun en rebeldía, lo que es contrario á la esencia del juicio criminal.

Sr. Padilla—Pido la palabra.

Yo sentiría que se suprimiera esta disposición, porque se contraría uno de los propósitos de la ley, que ha sido precisamente el de hacer efectiva la penalidad, en los casos de violación de la ley electoral.

Sr. Argerich—Si el procesado está dentro del país, podrá ser tomado y

traído ante la justicia; si está fuera, no hay ningún interés en ir á buscar al prófugo.

Sr. Padilla—Puede pasar de una provincia á otra.

Sr. Correa—Cualquiera que sea la naturaleza del juicio, es una iniquidad fallarlo en rebeldía.

Sr. Presidente—¿La comisión acepta la supresión propuesta?

Sr. Vedia—La comisión no puede ser consultada en este momento.

Sr. Argerich—Pido que se vote por partes el inciso 5º del artículo 4º en discusión.

Sr. Presidente—Se van á votar los cuatro primeros incisos del artículo 4º.

—Se votan y resultan aprobados.

Sr. Presidente—Se va á votar por partes, como se ha pedido, el inciso 5º.

—Se vota: “El procedimiento en las causas electorales continuará aunque el querellante desista”, y resulta afirmativa.

—Se vota: “y la sentencia que se diese producirá ejecutoria, aunque se dicte en rebeldía del acusado” y resulta afirmativa de 40 votos.

—En discusión el artículo 5º.

Sr. Gouchon—Pido la palabra.

Voy á pedir que se modifique la última parte del artículo 5º.

Me parece que toda sentencia que imponga penas corporales ó inhabilitación, debe ser apelable. Es demasiado apreciable la libertad de la persona para dejarla librada al solo criterio de un juez.

Propongo, entonces, que diga la ley: Siempre que imponga una pena corporal, inhabilitación ó multa de más de cien pesos.

Sr. Argerich—Yo no he oído bien lo propuesto por el señor diputado por la capital. Había pensado eliminar de la ley todo lo que significase restricción del derecho de apelación con relación á cualquier fallo.

Creo que el juez no puede ir nunca más allá de los pedidos de la acusación, en cuyo caso todas las sentencias serán apelables ó nó, según la voluntad del acusador. Implica una profunda injusticia á mi entender también, el que no

sea apelable un fallo de esta naturaleza que hiere precisamente el capital mayor del ciudadano, es decir su derecho de votar y su habilidad política.

Creo que no hay interés de ningún género en limitar el derecho de la apelación en todo condenado; y en este sentido formulo la moción.

Sr. Gouchon—Yo acompaño al señor diputado en su moción.

Sr. Lucero—Acabo de consultar á los señores miembros de la comisión de negocios constitucionales, y están todos conformes en aceptar la enmienda propuesta por el señor diputado Argerich, en el sentido de que la sentencia en materia electoral sea apelable.

Sr. Gouchon—Pero no toda resolución.

Sr. Lucero—Toda sentencia.

Sr. Argerich—Toda sentencia definitiva.

Sr. Roca—Pido la palabra.

Antes de proceder á votar el artículo en discusión, voy á formular una moción de reconsideración respecto de la última parte del artículo anterior, que acaba de ser sancionado por el voto de la cámara.

Entiendo, señor presidente, que esta disposición que ha sido proyectada por la comisión de negocios constitucionales, viene á establecer una derogación de los principios del derecho común que rigen en materia criminal.

No es posible, señor presidente, admitir que en las causas más graves, en aquellas que afectan la vida y la propiedad del ciudadano, se pueda condenar en rebeldía al acusado. Admitir esto, derogando todas las prescripciones del derecho común, me parece inaceptable.

No veo ninguna razón fundamental para establecer esta derogación de los principios generales, y por esto voy á permitirme formular moción de reconsideración, en la inteligencia de que la cámara no ha de tener inconveniente en prestarle su voto.

—Aprobado.

Sr. Presidente—Se va á votar la reconsideración propuesta por el señor diputado por Córdoba, para suprimir la segunda parte del inciso 5º.

—Se vota, y resulta afirmativa de dos tercios de votos.

—Se lee: «y la sentencia que se diese producirá ejecutoria aun que se dicte en rebeldía del acusado.»

Sr. Presidente—Está en discusión la parte cuya supresión pide el señor diputado por Córdoba.

Sr. Lucero—El juicio electoral entiendo que es un juicio especial, y no podría seguirse si la sentencia perdiera su carácter de ejecutoria en el caso de rebeldía.

Por lo demás, la garantía del acusado reside en la última parte del artículo 114, que especifica que en ningún caso se omitirá la citación y audiencia del acusado y la omisión anulará todo lo que se obrase en consecuencia.

Ahora bien; la ley al sancionar esta segunda parte del inciso 14, lo mismo que la correlativa del artículo 117 que es la que tiene á discusión la honorable cámara, evidentemente ha querido diferenciar los juicios penales en materia electoral de los juicios penales ordinarios.

Por esta razón, y para dar mayor eficacia al juicio, creo que debe mantenerse la parte que se discute.

Sr. Argerich—Pido la palabra.

Toda la cuestión—pido disculpa por ocupar un momento más la atención de la cámara,—toda la cuestión está en el alcance que tiene la palabra *citación* y en la omisión de los medios para hacer la reclamación de nulidad.

Yo, por ejemplo, interesado en perseguir á un individuo, me presento, al amparo de esta ley, denunciando un delito cometido en la capital de la república, ante un juez del crimen que tiene jurisdicción para entender. Denuncio falsamente el domicilio del encausado. Se hace la citación por medio de oficio ó exhorto y bajo la responsabilidad del acusador se tramita todo el proceso.

Sr. Correa—Tiene derecho de continuarlo.

Sr. Argerich—El hombre no comparece porque no ha sido citado en forma, y la ley es tan sumaria que no tiene precepto ninguno relativo á la manera de hacer las citaciones. No es difícil, pues, que un inocente, ajeno por completo á la acusación, sea condenado,—y ya sabemos lo que es revisar un proceso!

Sr. Lucero—Pero no puede omitirse la audiencia del acusado!

Sr. Argerich—A menos que se modifique el artículo, el juicio seguirá en rebeldía. A ésto nos oponemos porque es una derogación á lo que manda la ley en el artículo 150 del código de procedimientos criminales.

Sr. Galiano—Si no hay medio de asegurar la persona del presunto delincuente, ¿cómo se puede hacer efectivo el juicio si puede comparecer cuando quiere y si quiere?

Sr. Correa—Lévoy á decir cómo. El acusado que no comparece puede ser llevado á la presencia del juez como cualquier testigo.

Sr. Galiano—Si es parte no puede procederse á su respecto como contra un testigo.

Sr. Argerich—Llamo la atención de la cámara sobre uno de los incisos de este artículo que hemos sancionado; y no he querido insistir para pedir términos mayores porque no deseo que estos juicios tengan duración indefinida. No es posible materialmente á defensor alguno producir la prueba que se debe en puntos apartados de la república, dentro del término perentorio que este artículo establece: tres días.

Sr. Lucero—Como mínimo, pero el juez puede ampliarlo.

Sr. Argerich—No puede ampliarlo, son términos perentorios de la ley; de tal manera que no hay juicios más duros ni más penosos que éstos.

Sr. Lucero—Debo hacer presente al señor diputado que el artículo de la ley dice textualmente: se podrá fijar un término como base de tres días.

Sr. Argerich—¿Un término como base, de tres días? Como base mínimo no dice la ley.

Sr. Robirosa—En el inciso siguiente se alude á los tres días como un término perentorio. Este inciso 2.º parece que dijera como mínima. Por lo demás, yo estoy con las ideas del señor diputado.

Sr. Argerich—Le prevengo al señor diputado que he tenido ocasión de intervenir...

Sr. Uribe (F.)—¡Que se vote!

Sr. Roca—Pido la palabra.

Sr. Martínez (J. A.)—¡Que se vote; ya se ha discutido bastante!

Sr. Roca—Yo voy á fundar mi voto, si no he de molestar mucho la atención del señor diputado.

Sr. Martínez (J. A.)—No señor! A mí no me molesta.

Sr. Roca—Parecería que no fuera

así porque solicitó que se votara cuando yo había pedido la palabra.

Simplemente quiero dejar constancia de que á mi juicio es tan clara y precisa la doctrina del señor diputado Argerich al pedir la supresión del artículo, que si lo sancionamos tal como viene proyectado por la comisión, habrá una verdadera contradicción entre el artículo 114, me parece, á que acaba de referirse el señor diputado por Tucumán, y el actualmente en discusión.

Por el primero, se exige como requisito indispensable la citación y audiencia del encausado; y en el segundo, viene á establecerse la posibilidad de que pueda ser condenado en rebeldía.

Sr. Lucero—Si no comparece.

Sr. Roca—La rebeldía puede ser posterior, lo que nunca sería equiparable á la rebeldía inicial, á seguir el juicio desde el principio en rebeldía, lo que podría conducir á condenar á un encausado sin haber sido oído, y esto sería una verdadera monstruosidad jurídica.

Sr. Argerich—¡Es claro!

Sr. Roca—Por estas consideraciones votaré en contra del artículo.

Sr. Galiano—Pido la palabra.

En el caso del juicio de que se trata, el presunto delincuente puede comparecer, si quiere. Si no se le pudiera condenar en rebeldía, estaría en su mano burlar la ley, haciendo ilusorio el juicio. Le bastaría no concurrir, y como no hay prisión preventiva, el juez no lo podría encausar, obligándolo á comparecer.

Sr. Argerich—Pido la palabra.

Para decir la última en este debate después de las categóricas y luminosas con que el señor diputado por Córdoba acaba de fundar su voto.

En los procesos electorales de hace dos años ante la justicia del crimen de la capital hubo un condenado en rebeldía; no compareció á la audiencia, y no obstante se le siguió el proceso....

Sr. Lucero—Fué en virtud de la segunda parte del artículo 114.

Sr. Argerich—...lo cual está en contra de toda las doctrinas que informan nuestro procedimiento criminal, aún tratándose de criminales autores de delitos mucho más graves.

Sres. Padilla y Uribe (F.)—¿Por qué no compareció?

Un señor diputado—Porque es el único medio de defenderse en esos momentos.

Sr. Iriondo—Porque no disponía de esta nueva ley.

Sr. Demaría—Pido la palabra.

He votado acompañando á la comisión pero realmente éste es para mí un caso de conciencia.

Hay una razón fundamental para votar la modificación que propone el señor diputado por la capital, razón que no ha sido manifestada todavía y por eso me creo en el deber de llevarla á conocimiento de la cámara rápidamente.

En todos los juicios criminales y civiles comunes, se admiten excepciones previas. De manera que cuando un procesado tiene excepciones que proponer, antes de contestar la demanda, las propone y el juez las resuelve, pudiendo apelar ante el superior, que se pronuncia, estableciendo si es ó no admisible la excepción.

Sr. Fonrouge—En los juicios ordinarios.

Sr. Demaría—Sí, señor: y las excepciones se substancian previamente.

Sr. Lucero—Pero en estos juicios no son admisibles las excepciones.

Sr. Demaría—Si lo son; pero se substancian juntamente con el fondo del asunto y no como artículo previo. De manera que cuando el procesado tiene excepciones que alegar, está obligado á discutir las junto con el fondo del asunto; y puede darse este raro caso: que después de resuelto el fondo del asunto en primera instancia y de rechazadas las excepciones, la cámara, en la apelación conjunta de la excepción y del fondo, resuelva favorablemente la excepción.

A mi me parece que sin esta estorsión, realmente inquisitorial, sin esta derogación á todos los principios que establecen que las excepciones deben tramitarse y resolverse previamente, hay todas las garantías para que estos juicios no se dilaten, y que no debemos añadir á la supresión del carácter previo de las excepciones el procedimiento en rebeldía, porque esto sería verdaderamente atentar contra las garantías de las libertades individuales, puesto que los jueces tienen todos los medios para hacer concurrir al procesado.

No quiero entrar á discutir; voy simplemente á agregar otro argumento. Las prescripciones que establece la ley electoral, no derogan el código de procedimientos ni ninguna de las leyes anteriores, vigentes en el país. Hasta las leyes de partida están vigentes y son

perfectamente aplicables. La ley electoral solo establece procedimientos especiales y modifica el código en cuanto ella lo modifica; pero todo el resto del código de procedimientos queda vigente; y los jueces tienen, no uno, sino cincuenta recursos para hacer concurrir á los acusados; recursos que, si no los ponen en práctica, es porque no quieren. De manera que no es necesario establecer esta excepción, dejándonos llevar del deseo, muy natural, de hacer leyes que sean lo más perfectas posibles.

Sr. Padilla—Pido la palabra.

En esta materia electoral, tenemos una experiencia que nos debe hacer meditar mucho ante todo lo que importe rebajar la penalidad ó abrir una válvula á las faltas que tanto conocemos.

Sabemos muy bien, señor presidente, que en esta materia electoral, donde más fallas existen es por el lado de los poderes públicos; el temor al fraude por parte de los ciudadanos, ha sido la causa predominante que ha impedido el cumplimiento de nuestras buenas leyes electorales.

Yo no voy á hacer más oposición que la de señalar el caso posible que se deja con esta supresión que piden los señores diputados.

Se cita al acusado; comparece; vienen sus padrinos, casi siempre; inmediatamente lo hacen escapar y queda el juicio terminado.

Sr. Demaría—Queda pendiente

Sr. Padilla—Queda pendiente, pero transcurre, entre tanto, la prescripción que se opera en poco término, porque se trata de pena leve.

Sr. Argerich—La prescripción no se opera sino por abandono de la acción fiscal. Mientras esta acción se cumpla, no hay ese peligro, (*¡Muy bien!*)

Sr. Roca—La única observación que voy á hacer al señor diputado por Tucumán, es que los inconvenientes de la prescripción sólo existirán en el caso de sentencia en rebeldía, porque entonces vendría la prescripción de la pena, mientras que en el caso de la suspensión del juicio, no hay prescripción.

Sr. Padilla—Hay prescripción del derecho de acusar.

Sr. Castro—Señor presidente: lo que es evidente, no se discute. Lo que dicen los señores Roca, Demaría y Argerich, es de toda evidencia. ¡Votémoslo!

Sr. Uribe (F.)—Será para el señor diputado, pero no para nosotros.

Sr. Presidente—Se va á votar.

Los que estén por la supresión de la segunda parte del inciso 5.º, sírvanse ponerse de pie.

— Resulta afirmativa de 41 votos

Sr. Presidente—Queda suprimido. Continúa la discusión del artículo 5.º

Sr. Correa—Pido la palabra.

Desearía que el señor miembro informante me explicara cómo puede conciliarse la primera parte del artículo que estamos por votar, con el inciso primero. Dice que para ante los jueces nacionales de sección se concederá apelación de toda resolución de las juntas electorales de distrito.

Debo observar que, según dispone la ley, de las juntas electorales forma parte precisamente el juez nacional de sección; de manera que, como miembro de la junta, dicta una resolución, y después se apela ante él mismo, á objeto de que revea la resolución que ha dictado.

Desearía que el señor miembro informante me explicara qué garantía ofrece la apelación, si se la lleva ante el mismo juez que produjo la sentencia.

Sr. Presidente—¿El señor diputado propone alguna modificación?

Sr. Correa—Me parece que con una pequeña modificación, que entiendo la comisión no tendrá inconveniente en aceptar, quedaría completamente subsanado ese inciso. Consistiría en agregar que la apelación será concedida para ante el reemplazante.

Sr. Secretario Sorondo—¿En qué parte del artículo?

Sr. Correa—Después de las palabras: «juntas electorales de distrito» intercalar: «siempre que ellos no hubiesen formado parte, y en este caso para ante su reemplazante»; y después lo demás del artículo.

Sr. Presidente—Sírvase leer el señor secretario el artículo en la forma que quedaría.

—Se lee:

«Art. 5.º Sin perjuicio de las reglas que sobre las apelaciones se especifican en la ley electoral y en las de procedimientos ante los tribunales nacionales, habrá apelación de toda sentencia definitiva en materia electoral, siempre que se imponga una multa de más de doscientos pesos y arresto de más de dos meses, en la forma siguiente:

- 1.º Para ante los jueces nacionales de sección, de toda resolución de las juntas electorales de distrito, siempre que ellos no hubieran formado parte, y en este caso para ante su reemplazante.»
- 2.º Para ante las cámaras federales de apelación de los fallos de los jueces de sección.»

Sr. Gouchon—Pido la palabra.

Voy á votar en contra de la parte que hace inapelable la sentencia de los jueces cuando impongan penas que no excedan de doscientos pesos de multa y arresto de más de dos meses y la inhabilitación.

Creo que no es posible limitar la libertad individual dejando al criterio de un solo juez, que puede ser apasionado, porque puede tomar parte en las cuestiones políticas. Es evidente que no permanecerá indiferente ese juez ante las luchas políticas que puedan agitar el país, y un juez que participa de las pasiones políticas puede cometer una injusticia y condenar á una persona á sufrir una pena injusta, sin tener recurso ante el superior.

Esto, señor presidente, no debe sancionarse. Toda pena corporal, toda sentencia que inhabilite al ciudadano para el ejercicio de sus derechos políticos, debe ser apelable. (*Muy bien!*)

Sr. Argerich—Entiendo que la comisión ha aceptado mantener los dos incisos de su artículo, precedidos de estas palabras:

«Toda sentencia definitiva será apelable». Y 1.º y 2.º tal cual están en el despacho.

Sr. Vedia—En esa forma acepta la comisión, y debo hacer presente que lo que se está discutiendo son disposiciones de la ley vigente en materia electoral.

—Se vota el artículo 5.º y es aprobado en esta forma:

Toda sentencia definitiva será apelable:

- 1.º Para ante los jueces nacionales de sección, de toda resolución de las juntas electorales de distrito.
- 2.º Para ante las cámaras federales de apelación, de las fallos de los jueces de sección.

—En discusión el artículo 6.º

Sr. Argerich—Pido la palabra.

Sería muy prudente poner: «y cuanto precepto se opusiese á la presente ley», como es de estilo.

Sr. Presidente — Si la comisión acepta....

Sr. Vedia — Están perfectamente examinados por la comisión los artículos que hay que derogar. Mejor habría sido quizá,—eso se discutió en la comisión,—poner: «deróganse todas las disposiciones que se opongan á la presente ley.» Pero como están estudiados los artículos que se conexionan con estas disposiciones, la comisión resolvió enumerarlas.

Sr. Lucero—A objeto de facilitar la consulta está la derogación expresa.

—Se vota el artículo 6º del despacho de la comisión y es aprobado.

—El 7º es de forma.

Sr. Castro—Hago indicación para que se comunique al senado, si es posible hoy mismo, la sanción de este proyecto de ley.

—Asentimiento.

MOCIÓN

Sr. Lacasa—Pido la palabra.

La honorable cámara había fijado la sesión del viernes para tratar el asunto referente á la fusión de ferrocarriles. Pero el miembro informante de la comisión se encuentra algo indispuerto, y por esta razón me ha indicado que proponga á la cámara que ese asunto se trate el lunes.

Hago moción en ese sentido.

—Asentimiento.

Sr. Presidente — Queda levantada la sesión.

—Son las 8 y 5 p. m.